

MEDELLÍN, MIÉRCOLES 4 DE JULIO DE 2012

Gaceta Departamental

Registrando la historia de Antioquia desde 1908



EDICIÓN DE 60 PÁGINAS

Registrado en el Ministerio de Gobierno por Resol. No. 000474 de junio de 1967 - Tarifa postal reducida No. 2333 de la Admón Postal Nal. - Porte Pagado

No.19.189

SUMARIO

RESOLUCIONES



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA GENERAL
Imprenta Departamental de Antioquia
Dr. Sergio Arroyave maya
Director



ORDEN AL MÉRITO
CÍVICO Y EMPRESARIAL
MARISCAL JORGE ROBLEDO
CATEGORÍA ORO



RESOLUCIÓN N°

041374

15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN FACTORES DE RIESGO
DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE
ANTIOQUIA**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las conferidas por los Decretos 1950 de 1964 y 677 de 1995, las Leyes 9ª de 1979, 715 de 2001, Decreto Ordenanza N° 2575 de 2008, la Resolución N° 23483 del 07 de octubre de 2009 y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO:

Que Conforme a lo dispuesto en la Ley 715 del 2001, Decretos 1950 de 1964, 677 de 1995, a las Resoluciones 10911 de 1992 y 1478 de 2006 del Ministerio de la Protección Social y demás normas concordantes, a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia le corresponde ejercer la inspección, vigilancia y control de los establecimientos farmacéuticos, que fabriquen, distribuyan o vendan productos farmacéuticos, Farmacias, Droguerías Depósitos de Medicamentos, Agencias de Especialidades Farmacéuticas o similares.

Que el día 14 de septiembre de 2010, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia a la **Droguería Cafetera** ubicada en la Plaza Principal del municipio de Nariño Antioquia, cuya **Propietaria** es la señora **Beatriz Eugenia Escobar** identificada con cédula de ciudadanía N° 43.601.982 y su **Directora Responsable** el señor **Gabriela Gallego Oozco** identificada con cédula de ciudadanía N° 21.894.242 y con Credencial de Expendidora de Drogas inscrita en la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con el N° 2368.

Que practicadas las diligencias previas, mediante Auto de Iniciación de Procedimiento radicado con el N° 22274 de septiembre 30 de 2011 se inició la investigación, y se formularon cargos mediante Auto de Cargos radicado con el N° 22349 de octubre 11 de 2011 contra las señoras Beatriz Eugenia Escobar y Gabriela Gallego Oozco en sus calidades de **Propietaria y Directora Responsable** de la **Droguería Cafetera**, por infringir el artículo 68 del **Decreto 1950 de 1964**, artículos 13, 69, 72 literales b), d), e) e i) y 77 parágrafos 1º y 2º del **Decreto 677 de 1995**, literal b) numeral 3: del artículo 8 de la **Resolución 1403 de 2007**, numerales 3.2 literales c), d), i), j) y k), 3.3. literales f) y g), 3.6.5 y 5.3 literales c) y f) Capítulo II Título II, literal a) del numeral 7.5. del Capítulo III Título II, numerales 2.1 Inciso final y 2.2 literal d) Capítulo V Título I del Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos del Servicio Farmacéutico, adoptado



mediante **Resolución 1403 de 2007**, artículos 11 parágrafo 2º y 5º y 20 numerales 3 y 6 del **Decreto 2200 de 2005** y artículo 4 de la **Resolución 010911 de 1992**

Dicho auto de cargos fue notificado personalmente a las involucradas, para que ejercieran su derecho de defensa, respetándoles de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual presentaron los respectivos descargos dentro del término de ley.

Que mediante Auto de Pruebas N° 23268 del 12 de Diciembre de 2011 fueron aceptados como pruebas los documentos aportados por las implicadas dentro de sus descargos y se rechazó la practica de una nueva visita al establecimiento farmacéutico, también solicitada en los descargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Se hallaron en condiciones irregulares y anómalas mil novecientas cuarenta y ocho (1.948) unidades de sesenta (60) medicamentos y productos farmacéuticos diferentes, tales como:

- **Prohibidos:** Vencidos, muestras médicas, medicamentos pertenecientes a entidades de seguridad social cuya venta o tenencia esta prohibida, empaques y con pseudofedrina.
- **Fraudulentos:** Con las etiquetas enmendadas, extranjeros, sin registro sanitario del INVIMA, ocultando información y se evidenció que adquiriría productos a proveedores no autorizados.
- **Alterados:** Fuera de su empaque secundario.
- **que Incumplían las Normas de Calidad en Etiquetas, Rótulos y Empaques:** sin laboratorio fabricante, sin fecha de vencimiento ni número de lote y sin sistema de seguridad en sus tapas.

Estos productos fueron decomisados como medida sanitaria de seguridad, y se dejó copia del acta levantada con ocasión de la visita.

Al respecto, los parágrafos primero y segundo del artículo 77 del Decreto 677 de 1995, hacen referencia a las **PROHIBICIONES** para los establecimientos farmacéuticos, señalando con notoria claridad:

*"PARÁGRAFO PRIMERO: Se prohíbe la **TENENCIA** o la **VENTA** de productos farmacéuticos que se presenten en envase tipo hospitalario, que sean distribuidos por entidades publicas de seguridad social, de muestras médicas y de productos farmacéuticos con la fecha de vigencia, expiración o caducidad vencida o sin registro sanitario, en las droguerías, depósitos de drogas, farmacias droguerías y establecimientos similares.*

*"PARÁGRAFO SEGUNDO: Se prohíbe la fabricación, **TENENCIA** o **VENTA** de productos farmacéuticos **FRAUDULENTOS O ALTERADOS** en los establecimientos farmacéuticos".*



Igualmente el Decreto 677 de 1995, en su artículo 2° parágrafo 2, establece que **MEDICAMENTO** *“es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentando bajo forma farmacéutica que se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento curación o rehabilitación de la enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto estos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado”*.

Por lo anterior es pertinente señalar la importancia de tener un Director Responsable en la droguería que cumpla con sus funciones, para que en ejercicio de las mismas le de un adecuado manejo a los medicamentos y al establecimiento farmacéutico, por ello es necesario que este mantenga una permanente dirección, de buen manejo y cuidado en cuanto a los medicamentos que ingresan, y salen del establecimiento. Observamos que por falta de diligencia y cuidado se encontraron en el establecimiento, medicamentos en diferentes situaciones que desdican mucho del desempeño de sus responsabilidades, y efectivamente ponen en riesgo la salud individual y colectiva de la población usuaria de la Droguería Cafetera.

Además es responsabilidad precisamente de quienes a ello se dedican, no sólo adquirir los productos y medicamentos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización ya que lo que está de por medio es la salud pública, el bienestar colectivo y la propia vida de quienes requieren los medicamentos prescritos por sus médicos para el alivio o la cura de sus diversas dolencias o enfermedades.

En cuanto a los medicamentos sin registro sanitario, se les recuerda que dicho registro, es el Documento Público expedido por el INVIMA o la autoridad delegada, previo el procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos técnico-legales establecidos en el Decreto 677 de 1995, el cual faculta a una persona natural o jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, envasar, procesar y/o expender los medicamentos, cosméticos, preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales, productos de aseo, higiene y limpieza y otros productos de uso doméstico, por lo tanto los productos que no cuentan con éste y encontrados son fraudulentos y está prohibida su tenencia. **Artículo 2º y 77 parágrafo 2º del Decreto 677 de 1995.**

Con respecto a los medicamentos fuera de su empaque (“caja original”), se esta desconociendo con ello el literal d) del artículo 2º del Decreto 677 de 1995, que define como **medicamento alterado**: cuando el empaque no corresponda al autorizado o se hubiere sustraído del original, total o parcialmente y que medicamento no solo es su parte constitutiva sino que “....Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto estos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado”, de acuerdo a la definición de éste en el artículo 2º del Decreto 677 de 1995.

Es importante resaltar que la información de la fecha de vencimiento y lote, la llevan en el empaque, rótulo y etiqueta y que los que estaban fuera del empaque secundario, al carecer de esta información son motivo de decomiso y además

puede llevar a incurrir en errores de despacho, suministro, dispensación, etc., de medicamentos.

Adicionalmente, las condiciones higiénico locativas del establecimiento no eran las adecuadas ya que fueron evidenciadas las siguientes irregularidades:

- No tenía exhibido el horario de atención al público.
- Faltaban estibas.
- Las áreas no estaban identificadas y señalizadas
- No cumplía con el código de colores en recipientes y bolsas plásticas.
- No contaba con contrato para la disposición final de residuos.
- Las paredes y techos se encontraban deteriorados y no eran de fácil limpieza.
- Las estanterías estaban sucias lo cual compromete la calidad de los medicamentos.
- La humedad relativa superaba el 70%.
- No se llevaban los registros de las variables de temperatura y humedad relativa.

Igualmente, no se conservaba la cadena de frío para los medicamentos que requieren refrigeración y la ubicación de los medicamentos en las estanterías no es adecuada. Así como tampoco, se tenían documentados los procesos y procedimientos que se realizaban en el establecimiento, No contaba con actas de recepción ni se realizaba una recepción técnica y administrativa

Es de resaltar además que durante la visita se encontraron varias bolsas con medicamentos marcados como de uso institucional y muestras médicas, frente a lo cual la directora responsable manifestó que eran donaciones del padre Pedro Nel Giraldo, dentro de las cuales se encuentran medicamentos extranjeros, sin registro sanitario, fuera del empaque y fórmulas médicas del Hospital San Joaquín con el sello de entrega de los medicamentos al usuario.

ANÁLISIS DE LOS DESCARGOS

Las implicadas manifiestan en los descargos haber dado cumplimiento a los requerimientos dejados por los funcionarios durante la visita, para lo cual aportan los documentos que soportan su afirmación los cuales fueron tenidos como pruebas dentro de la presente investigación mediante Auto N° 23268 del 12 de diciembre de 2011 en donde además se rechazó la practica de una nueva visita al establecimiento farmacéutico solicitada por las mismas dentro de los descargos.

El haber tomado las medidas pertinentes APRA cumplir con la normatividad sanitaria dentro de la droguería según lo afirmado por las involucradas en sus descargos, es tenido en cuenta como factor atenuante al momento de imponer las respectivas sanciones de conformidad con lo estipulado en el artículo 122 del Decreto 677 de 1995.

Este Despacho considera, que desde mucho tiempo antes, cuando por vez



primera se reglamentó en nuestro país el ejercicio de la química farmacéutica y de la farmacia mediante la Ley 23 de 1962, claramente se determinó, en su artículo 2º que ello ***“implica una función social de cuyo cabal desempeño son responsables los profesionales que la ejercen”***.

Si la práctica de la farmacia no tuviera mayor incidencia en la sociedad, tal actividad podría ejercerse libremente, en los términos del artículo 26 de la Constitución Política. Pero las consecuencias del ejercicio arbitrario o irresponsable de la misma tienen tanto calado en el núcleo social, que no en vano viene reglamentándose su práctica desde la expedición de la ley 23 de 1962, con el establecimiento de severas sanciones a quienes no se ciñan a lo allí estipulado, y lo único que buscan es la protección de los intereses y derechos colectivos, y entre ellos, uno de los más preciados después de la vida, como es el de la salud.

Los artículos 48 y 49 de la Constitución Política establecen la obligación del Estado de dirigir, coordinar y controlar la prestación del servicio público de seguridad social, lo que se hará de acuerdo con la ley, y además garantizan a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, estableciendo que *“toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y el de su comunidad”*.

También por expreso mandato constitucional (artículo 334), el Estado tiene que intervenir en todos los renglones de la economía, lo cual incluye la *“producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...”* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Resolución 010911 de 1992 del Ministerio de Salud (hoy de la Protección Social), la Ley 100 de 1993, el Decreto 677 de 1995, y la ley 715 de 2001, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en *“la prevalencia del interés general”*, y *“el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación...”*

Todas las normas referenciadas, no son otra cosa que parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los derechos colectivos de todos los habitantes del país, y que textualmente reza:

“La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios” (Negrilla fuera de texto).

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y 125 del Decreto 677 de 1995, son las siguientes:



- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Tener productos farmacéuticos prohibidos, alterados, fraudulentos, que incumplan normas de calidad en etiquetas, rótulos y empaques, además que algunos se encontraran mal almacenados, pone en riesgo y en grave peligro la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Es de anotar que de la gran cantidad de visitas que diariamente realizan los funcionarios de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia a los establecimientos farmacéuticos de todo el departamento, en muchos de ellos ni siquiera se encuentra un solo medicamento en condición irregular, ni son objeto de requerimientos; porque precisamente esa es su obligación legal, garantizar una correcta y adecuada dispensación de medicamentos a la comunidad que los requiera.

Por todo lo anterior, es necesario hacerles saber a las implicadas que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular. Tener en un establecimiento farmacéutico medicamentos y productos en las condiciones en que se encontraron en la **Droguería Cafetera** del municipio de Nariño, pone en riesgo la salud pública que el estado tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a las señoras **Beatriz Eugenia Escobar** identificada con cédula de ciudadanía N° 43.601.982 y **Gabriela Gallego Oozco**



identificada con cédula de ciudadanía N° 21.894.242 y con Credencial de Expendedora de Drogas inscrita en la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con el N° 2368, en sus calidades de **Propietaria y Directora Responsable** respectivamente de la **Droguería Cafetera** ubicada en la Plaza Principal del municipio de Nariño Antioquia, con **MULTAS** equivalentes a **CIENT (100) Y OCHENTA (80) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES**

VIGENTES respectivamente, valor que deberá ser cancelado a favor del Fondo Rotatorio de Estupefacientes de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la **Cuenta de Ahorros No. 430-81076-2 del Banco de Occidente**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. **El comprobante de pago será entregado en la Dirección Factores de Riesgo para su verificación.** De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo

ARTÍCULO SEGUNDO: Inscribir el presente acto administrativo, en el Registro de Propietarios, Administradores y Directores Responsables de establecimientos farmacéuticos de la Dirección Factores de Riesgo de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y sustentarse debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Las sancionadas deberán asistir a una capacitación gratuita sobre legislación farmacéutica, dictada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para lo cual se les estará informando oportunamente el día, la hora y el lugar, enterándoles que el cumplimiento de una sanción, no exime a los infractores de la ejecución de una obra o medida de carácter sanitario que haya sido ordenada por la autoridad sanitaria competente.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los 15 MAY 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA

**Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y protección Social de Antioquia**

**RESOLUCIÓN N° 041375**

15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN FACTORES DE RIESGO
DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE
ANTIOQUIA**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las conferidas por los Decretos 1950 de 1964 y 677 de 1995, las Leyes 9ª de 1979, 715 de 2001, Decreto Ordenanza N° 2575 de 2008, la Resolución N° 23483 del 07 de octubre de 2009 y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO:

Que Conforme a lo dispuesto en la Ley 715 del 2001, Decretos 1950 de 1964, 677 de 1995, a las Resoluciones 10911 de 1992 y 1478 de 2006 del Ministerio de la Protección Social y demás normas concordantes, a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia le corresponde ejercer la inspección, vigilancia y control de los establecimientos farmacéuticos, que fabriquen, distribuyan o vendan productos farmacéuticos, Farmacias, Droguerías Depósitos de Medicamentos, Agencias de Especialidades Farmacéuticas o similares.

Que los días 17 de Nov-10, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visitas oficiales de inspección y vigilancia a la droguería **Drogas la Economía Rionegro** ubicada en la Calle 50 N°48-36 Local 104 del municipio de Rionegro, Antioquia, de propiedad de la sociedad **Depósito Principal de Drogas Ltda.**, cuyo **Representante Legal** es el señor **Jairo Alberto Morales Umba** identificado con cédula de ciudadanía N° 79.495.156, o quien haga sus veces, y su **Administradora** la señora **Raisa Elena Covo Menco** titular de la cédula de ciudadanía N° 1.038.099.525.

Que practicadas las diligencias previas, mediante Auto de Iniciación de Procedimiento radicado con el N° 22534 de octubre 20 de 2011 se inició la investigación, y se formularon cargos mediante Auto de Cargos radicado con el N° de Mayo de 2008 contra el señor , Raisa Elena Covo Menco y en sus calidades de **Propietaria, Administrador y Directora Responsable** de la **Drogas la Economía Rionegro**, por infringir los artículos 69 y 77 parágrafos 1º y 2º del **Decreto 677 de 1995**, artículos 11 numeral, 2 y 20 numeral 3 del **Decreto 2200 de 2005**, numerales 3.2. Literal j), 3.3. Literal f), 3.6.5, 5 del Capítulo II Título II, numerales 1.1.3, Inciso final numeral 2.1 Capítulo V Título I del Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos del Servicio Farmacéutico, adoptado

mediante **Resolución 1403 de 2007**, artículo 54 literal b) del **Decreto 4725 del 2005** y artículo 28 literal d) del **Decreto 219 de 1998**.

Que dicho auto de cargos fue notificado personalmente al señor **Jairo Alberto Morales Umba**, para que ejercieran su derecho de defensa, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual presentó los respectivos descargos dentro del término de ley.

Que la señora **Raisa Elena Covo Menco**, quien no acudió a notificarse personalmente, fue notificada por edicto y no presentó sus descargos, dejando inactivo su derecho de defensa.

Que mediante Auto de Pruebas N° 0978 del 09 de mayo de 2012 fueron aceptados como pruebas dentro de la presente investigación, los documentos allegados por el representante legal de la sociedad propietaria del establecimiento dentro del escrito de descargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Se hallaron en condiciones irregulares y anómalas trescientas cuarenta y cuatro (344) unidades de veintisiete (27) medicamentos y productos farmacéuticos diferentes, tales como:

- **Prohibidos:** Vencidos.
- **Alterados:** con el sistema de seguridad en la tapa alterado, fuera de su empaque secundario.
- **Que Incumplían las Normas de Calidad en Etiquetas, Rótulos y Empaques:** Sin laboratorio fabricante, sin número de lote y sin sistema de seguridad en sus tapas.

Es de aclarar que los medicamentos vencidos se encontraban separados pero sin predestruir.

Estos productos fueron decomisados como medida sanitaria de seguridad, y se dejó copia del acta levantada con ocasión de la visita.

Al respecto, los parágrafos primero y segundo del artículo 77 del Decreto 677 de 1995, hacen referencia a las **PROHIBICIONES** para los establecimientos farmacéuticos, señalando con notoria claridad:

*"PARÁGRAFO PRIMERO: Se prohíbe la **TENENCIA** o la **VENTA** de productos farmacéuticos que se presenten en envase tipo hospitalario, que sean distribuidos por entidades públicas de seguridad social, de muestras médicas y de productos farmacéuticos con la fecha de vigencia, expiración o caducidad vencida o sin registro sanitario, en las droguerías, depósitos de drogas, farmacias droguerías y establecimientos similares.*

*“PARÁGRAFO SEGUNDO: Se prohíbe la fabricación, **TENENCIA o VENTA** de productos farmacéuticos **FRAUDULENTOS O ALTERADOS** en los establecimientos farmacéuticos”.*

Igualmente el Decreto 677 de 1995, en su artículo 2° parágrafo 2, establece que **MEDICAMENTO** “es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentando bajo forma farmacéutica que se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento curación o rehabilitación de la enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto estos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado”.

Por lo anterior es pertinente señalar la importancia de tener un Director Responsable en la droguería que cumpla con sus funciones, para que en ejercicio de las mismas le de un adecuado manejo a los medicamentos y al establecimiento farmacéutico, por ello es necesario que este mantenga una permanente dirección, de buen manejo y cuidado en cuanto a los medicamentos que ingresan, y salen del establecimiento. Observamos que por falta de diligencia y cuidado se encontraron en el establecimiento, medicamentos en diferentes situaciones que desdichan mucho del desempeño de sus responsabilidades, y efectivamente ponen en riesgo la salud individual y colectiva de la población usuaria de la droguería Drogas La Economía Rionegro

En la visita realizada a la droguería pudo evidenciarse la falta de Director Responsable por lo que el establecimiento fue **CLAUSURADO** como medida sanitaria de seguridad la cual fue **LEVANTADA** una vez fue contratada la persona idónea para desempeñar esa función

Con respecto a los medicamentos fuera de su empaque (“caja original”), se está desconociendo con ello el literal d) del artículo 2° del Decreto 677 de 1995, que define como **medicamento alterado**: cuando el empaque no corresponda al autorizado o se hubiere sustraído del original, total o parcialmente y que medicamento no solo es su parte constitutiva sino que “...Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto estos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado”, de acuerdo a la definición de éste en el artículo 2° del Decreto 677 de 1995.

Es importante resaltar que la información de la fecha de vencimiento y lote, la llevan en el empaque, rótulo y etiqueta y que los que estaban fuera del empaque secundario, al carecer de esta información son motivo de decomiso y además puede llevar a incurrir en errores de despacho, suministro, dispensación, etc., de medicamentos.

En relación a las condiciones higiénico locativas del establecimiento se evidenciaron las siguientes irregularidades:

- No cumplía con el código de colores en recipientes y bolsas plásticas.
- Faltaban estibas.
- No todas las áreas se encontraban identificadas y señalizadas
- La unidad sanitaria se encontraba en mal estado.

Adicionalmente, el establecimiento no contaba con autorización de apertura expedido por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, no se tenía documentado el proceso de recepción, no contaba con actas de recepción y tampoco se realizaba una recepción técnica y administrativa.

ANÁLISIS DE LOS DESCARGOS

El representante legal de la sociedad dentro del escrito de descargos manifiesta que las irregularidades fueron subsanadas, como lo es el haber contratado un director responsable y que por lo tanto fueron emitidos conceptos favorables en visitas realizadas los días 11 de mayo y 21 de junio de 2011, para lo cual aporta copia de las actas de visita.

Frente a lo cual es pertinente señalar que las actas aportadas corresponden a visitas de inspección sanitaria realizadas por la Secretaría de Salud del municipio de Rionegro los días 07 de abril de 2011, 11 de mayo de 2011 y 21 de junio de 2011 en donde se obtuvo concepto desfavorable y favorables respectivamente, y que de acuerdo con las normas de competencia las visitas realizadas por el ente municipal son únicamente con el fin de verificar las condiciones locativas del establecimiento sin realizar una inspección total al mismo, es decir, en relación a los productos, servicios y a las condiciones generales del mismo.

Adicionalmente, en visita de inspección realizada por ésta Secretaría el 01 de marzo de 2012 se pudo evidenciar el incumplimiento de la normatividad sanitaria en el establecimiento motivo por el cual se emitió nuevamente concepto desfavorable al mismo, lo cual no corresponde con lo afirmado por el representante legal dentro de los descargos presentados, en relación a que a dado cumplimiento a todos los requerimientos.

Este Despacho considera, que desde mucho tiempo antes, cuando por vez primera se reglamentó en nuestro país el ejercicio de la química farmacéutica y de la farmacia mediante la Ley 23 de 1962, claramente se determinó, en su artículo 2º que ello ***“implica una función social de cuyo cabal desempeño son responsables los profesionales que la ejercen”***.

Si la práctica de la farmacia no tuviera mayor incidencia en la sociedad, tal actividad podría ejercerse libremente, en los términos del artículo 26 de la Constitución Política. Pero las consecuencias del ejercicio arbitrario o irresponsable de la misma tienen tanto calado en el núcleo social, que no en vano viene reglamentándose su práctica desde la expedición de la ley 23 de 1962, con el establecimiento de severas sanciones a quienes no se ciñan a lo allí estipulado, y lo único que buscan es la protección de los intereses y derechos colectivos, y entre ellos, uno de los más preciados después de la vida, como es el de la salud.

Los artículos 48 y 49 de la Constitución Política establecen la obligación del Estado de dirigir, coordinar y controlar la prestación del servicio público de seguridad social, lo que se hará de acuerdo con la ley, y además garantizan a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y

recuperación de la salud, estableciendo que *“toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y el de su comunidad”*.

También por expreso mandato constitucional (artículo 334), el Estado tiene que intervenir en todos los renglones de la economía, lo cual incluye la *“producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...”* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Resolución 010911 de 1992 del Ministerio de Salud (hoy de la Protección Social), la Ley 100 de 1993, el Decreto 677 de 1995, y la ley 715 de 2001, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en *“la prevalencia del interés general”*, y *“el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación...”*

Todas las normas referenciadas, no son otra cosa que parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los derechos colectivos de todos los habitantes del país, y que textualmente reza:

“La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios”.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y 125 del Decreto 677 de 1995, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Tener productos farmacéuticos prohibidos, alterados, que incumplan normas de calidad en etiquetas, rótulos y empaques, además que algunos se encontraran mal almacenados, pone en riesgo y en grave peligro la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Es de anotar que de la gran cantidad de visitas que diariamente realizan los

funcionarios de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia a los establecimientos farmacéuticos de todo el departamento, en muchos de ellos ni siquiera se encuentra un solo medicamento en condición irregular, ni son objeto de requerimientos; porque precisamente esa es su obligación legal, garantizar una correcta y adecuada dispensación de medicamentos a la comunidad que los requiera.

Por todo lo anterior, es necesario hacerles saber a los implicados que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular. Tener en un establecimiento farmacéutico medicamentos y productos en las condiciones en que se encontraron en la droguería **Drogas la Economía Rionegro** del municipio de Rionegro, pone en riesgo la salud pública que el estado tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a la sociedad **Depósito Principal de Drogas Ltda.**, cuyo **Representante Legal** es el señor **Jairo Alberto Morales Umba** identificado con cédula de ciudadanía N° 79.495.156, o quien haga sus veces, y a la señora **Raisa Elena Covo Menco** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.038.099.525, en sus calidades de **Propietaria y Directora Responsable** respectivamente de la droguería **Drogas la Economía Rionegro** ubicada en la Calle 50 N°48-36 Local 104 del municipio de Antioquia, con **MULTAS** equivalentes a **SETENTA (70) Y CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES** al momento de ejecución de la presente decisión, respectivamente, valor que deberá ser cancelado a favor del Fondo Rotatorio de Estupefacientes de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la **Cuenta de Ahorros No. 430-81076-2 del Banco de Occidente**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. **El comprobante de pago será entregado en la Dirección Factores de Riesgo para su verificación.** De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo

ARTÍCULO SEGUNDO: Inscribir el presente acto administrativo, en el Registro de Propietarios, Administradores y Directores Responsables de establecimientos farmacéuticos de la Dirección Factores de Riesgo de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a los

implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y sustentarse debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Los sancionados deberán asistir a una capacitación gratuita sobre legislación farmacéutica, dictada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para lo cual se les estará informando oportunamente el día, la hora y el lugar, enterándoles que el cumplimiento de una sanción, no exime a los infractores de la ejecución de una obra o medida de carácter sanitario que haya sido ordenada por la autoridad sanitaria competente.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los 15 MAY 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA

**Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y protección Social de Antioquia**

RESOLUCIÓN Nº 041377

15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA
SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección

Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que los días 17 de febrero y 21 de julio de 2009 y 21 de octubre de 2010, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visitas oficiales de inspección y vigilancia a la **Institución Educativa La Alegría de Aponder** ubicada en la Calle 77 entre las Carreras 73 y 74 del municipio de Carepa Antioquia, Representada Legalmente, o quien haga sus veces, por la señora **Yancy Zamarys Renteria Mosquera** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.421.259 y su Administrador, el señor **Fabricio Ibarguen Cañizales** identificado con cédula de ciudadanía No. 11.936.262.

Que mediante Auto No. 6123 del 30 de mayo de 2011, se inició la presente investigación y por Auto No. 23455 del 23 de diciembre de 2011 se formuló cargos la señora **Yancy Zamarys Renteria Mosquera** y al señor **Fabricio Ibarguen Cañizales**, en sus calidades de **Representante Legal y Administrador**, respectivamente, del establecimiento denominado **Institución Educativa La Alegría de Aponder**, por infringir el Literal d del artículo 84, artículos 185, 186, 193 y 196 de la Ley 9 de 1979.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente a la señora **Yancy Zamarys Renteria Mosquera**, para que ejerciera su derecho de defensa, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual presentó los respectivos descargos dentro del término de ley.

Que el señor **Fabricio Ibarguen Cañizales**, no se notificó personalmente, pero presentó sus descargos, por lo que se entiende notificado por conducta concluyente, de conformidad a lo establecido en el artículo 330 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al presente proceso de acuerdo al artículo 267 del Código Contencioso Administrativo que establece que *"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo"*.

Que mediante auto No. 550 del 16 de marzo de 2011, se decretó como prueba realizar una nueva visita al establecimiento a fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos dejados en las visitas de los días 17 de febrero y 21 de julio de 2009 y 21 de octubre de 2010, pero de acuerdo a lo informado, en oficio del 21 de marzo de 2012, por el Técnico Área de la Salud adscrito al municipio de Carepa, el establecimiento no funciona, por lo tanto no fue posible dar cumplimiento a lo ordenado en el auto de pruebas.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Antes de entrar a resolver el fondo del asunto, se hace necesario aclarar que las infracciones evidenciadas en visita realizada el día 17 de febrero de 2009, no serán tenidas en cuenta al momento de imponer la sanción, ya que le operó el fenómeno de la caducidad. Al respecto el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo estipula que *"salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas"*.

Por estar limitado en el tiempo el ejercicio de la acción por parte de la Administración, lo cual no requiere de consideración alguna diferente al simple transcurso de aquel, se hace

necesario entonces dar cabal aplicación a lo dispuesto en la norma, no obstante se seguirá el trámite para las visitas realizadas los días 21 de julio de 2009 y 21 de octubre de 2010.

Es pertinente aclararle a los implicados que para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos se debe contar con unas condiciones higiénico - locativas, las cuales han sido reglamentadas con el propósito de garantizar la calidad y proteger la salud de la población y que están contenidas en el Literal d del artículo 84, artículos 185, 186, 193 y 196 de la Ley 9 de 1979.

Frente lo anterior, manifiestan los implicados en sus descargos radicados No. 201200026894 del 2 de febrero de 2012, que dieron cumplimiento a los requerimientos dejados en las visitas, aportando como pruebas fotografías que así lo demuestra, pero es de advertir que el cumplimiento de los mismos no los exime de la responsabilidad administrativa que ello acarrea, pero le será tenido en cuenta como factor atenuante al momento de imponer la sanción.

Por otro lado, manifiestan los implicados que las actuaciones administrativas deben tener como fin único el cumplimiento de la normatividad sanitaria, por lo tanto las competencias asignadas son claras, que lo que pretendía el ente departamental y municipal en su momento era lograr el cierre del establecimiento y que los estudiantes que eran atendidos allí fueran asumidos por otro contratista, y para ello se apoyaron del Técnico Área de la Salud para que a través de sus funciones diera cierre definitivo al establecimiento violando el debido proceso.

Como prueba de eso, afirman que a la fecha el Técnico no ha vuelto al establecimiento para verificar el cumplimiento de los requerimientos, por lo tanto consideran que la presente actuación es carente de fundamento fáctico y legal, ya que no se compadece con la realidad actual en atención a que lo que sirvió de fundamento para esta investigación es violatoria de los intereses tutelados por la ley.

Frente lo anterior es importante advertirle a los implicados que le corresponde a la Secretaría Seccional de salud y Protección Social, a través de la Dirección Factores de Riesgo, ejecutar las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo del ambiente que afectan la salud humana, en los corregimientos departamentales y en los municipios de categorías 4ª, 5ª y 6ª de su jurisdicción.

En virtud de lo anterior, es competencia del Técnico Área de la Salud realizar las visitas de inspección y vigilancia a los establecimientos objeto de verificación, quien se encuentra plenamente facultado para dejar requerimientos y aplicar las medidas sanitarias de seguridad contempladas en el artículo 576 de la Ley 9 de 1979, las cuales se encuentran encaminadas a proteger la salud pública y en ningún momento favorecer o perjudicar a alguien con sus actividades.

Por lo tanto en ningún momento les han sido violados por parte de esta Dirección, ni principios ni derechos, toda vez que las visitas realizadas al establecimiento denominado **Institución Educativa La Alegría de Apende**, se realizó siguiendo los lineamientos de la Ley 9 de 1979 y con observancia plena y propia del debido proceso.

La Ley 9ª de 1979 es una norma de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza la señora **Yancy Zamaris Renteria Mosquera** y el señor **Fabricio Ibarguen Cañizales**, en el establecimiento denominado **Institución Educativa La Alegría de Aponder**, se encuentra enmarcada dentro de los factores de riesgo del ambiente que afectan la salud humana, por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la *"producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados..."* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en **la prevalencia del interés general.**"

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

Es por ello por lo que los motivos de inconformidad planteados en el escrito de descargos carecen en absoluto de soporte no sólo probatorio sino legal, toda vez que como **Representante Legal y Administrador** les es exigible, de acuerdo con la ley, una mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, por la trascendencia social que representa su actividad, al estar de por medio tal como se expuso con antelación la salud de la población.

Quando se trata de investigaciones administrativas, corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de **culpa grave** de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión, en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante la señora **Yancy Zamaris Renteria Mosquera** y el señor **Fabricio Ibarguen Cañizales**, el hecho de no haber sido sancionados antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*

e) Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.

Por todo lo anterior, es necesario hacerles saber a los implicados que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a la señora **Leidy Xiomara Renteria Mosquera** identificada con cédula de ciudadanía N° 39.424.514 en su calidad de **Representante Legal, o quien haga sus veces**, de la **Institución Educativa La Alegría de Apender** ubicada en la Calle 77 entre las Carreras 73 y 74 del municipio de Carepa Antioquia, con **MULTA** equivalente a **VEINTE (20) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES** respectivamente, valor que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar al señor **Fabricio Ibarguen Cañizales** identificado con cédula de ciudadanía No. 11.936.262, en calidad de Administrador de la **Institución Educativa La Alegría de Apender** con **AMONESTACIÓN** y se le conmina a dar cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

15 MAY 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 041378

15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE
ANTIOQUIA,**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 23 de marzo de 2010, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia al establecimiento denominado **Sorelly** ubicado en la Calle del Transporte del municipio de Belén de Bajirá, Antioquia, cuya **Propietaria** es la señora **Luz Sorelly David Macias** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.303.505.

Que mediante Auto No. 23093 del 24 de noviembre de 2011, se inició la presente investigación y por Auto No. 99 del 10 de enero de 2012 se formuló cargos a la señora **Luz Sorelly David Macias**, en su calidad de **Propietaria** del establecimiento denominado **Sorelly**, por infringir los artículos 417 y primer inciso del artículo 418 de la Ley 9 de 1979 y literal a numeral 6 artículo 2 del Decreto 3192 de 1983.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente a la involucrada, para que ejerciera su derecho de defensa, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual presentó los respectivos descargos dentro del término de ley.

Que mediante auto No. 549 del 16 de marzo de 2012, se rechazaron las pruebas solicitadas con el memorial de los descargos radicado No. 201200024304 del 1 de febrero de 2012.

Que ante la negativa de las pruebas se le concedió a la implicada el recurso de apelación, el cual debía interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, pero la señora **Luz Sorelly David Macias**, no hizo uso del derecho concedido, dejando inactivo su derecho de defensa.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con el párrafo del artículo 576 de la Ley 9 de 1979, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

La conducta objeto de aplicación de medida sanitaria el día 23 de marzo de 2010 es una infracción a los artículos 417 y primer inciso del artículo 418 de la Ley 9 de 1979, literal a numeral 6 artículo 2 del Decreto 3192 de 1983, por lo que al comprobar su violación se procedió al decomiso de los productos que constituyen evidencia física de la conducta infractora, que por demás se encuentra tipificada en el artículo 109 del Decreto 3192 de 1983, cuando establece que el Ministerio de Salud y los Servicios Seccionales de Salud, están en la obligación de ejercer control y vigilancia sanitaria, sobre las fabricas de alcohol y bebidas alcohólicas y sobre las bebidas alcohólicas para garantizar las condiciones sanitarias, de los procesos de elaboración, hidratación, envase, distribución, importación y exportación se procederá al decomiso del producto que no cumpla con las normas sanitarias vigentes.

La responsabilidad desplegada el día de los hechos, se encuentra enmarcada dentro de las normas de autenticidad y de las bebidas alcohólicas, específicamente sobre requisitos físico químicos, grado alcoholímetro, color, características organolépticas y empaque por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal, así lo manifiestan los artículos 576 de la Ley 9 de 1979, en los artículos 109 y siguientes del Decreto 3192 de 1983.

La Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3192 de 1983 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

Frente lo anterior manifiesta la implicada que el licor lo compró en otro establecimiento del mismo corregimiento, que nunca notó que estuviera adulterado, pues no tiene la capacidad para distinguir cuando el licor está falsificado, este factor será tenido en cuenta al momento de imponer la sanción como factor atenuante.

La actividad que realiza la señora **Luz Sorelly David Macias**, en el

establecimiento denominado **Sorelly**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de licores por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Por lo que es su responsabilidad, no sólo adquirir los productos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización, a través de una adecuada recepción y revisando que cada producto tenga la información correspondiente a cantidad de unidades, número de lote, registro sanitario, fecha de vencimiento y su procedencia.

Es por ello por lo que los motivos de inconformidad planteados en el escrito de descargos carecen en absoluto de soporte no sólo probatorio sino legal, toda vez que como **Propietario** le es exigible, de acuerdo con la ley, una mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, por la trascendencia social que representa la comercialización, al por mayor o al menudeo, de licores, al estar de por medio tal como se expuso con antelación la salud de la población.

Tener Productos Fraudulentos, **sin importar la cantidad que sea**, ponen en riesgo y en grave peligro la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, a través de la Dirección Factores de Riesgo, tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la *"producción, **distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...**"* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en **la prevalencia del interés general.**"

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

Cuando se trata de investigaciones administrativas, corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u

ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de **culpa grave** de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión, en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factores atenuantes para la señora **Luz Sorelly David Macias**, los buenos antecedentes y la ignorancia invencible según lo contemplado en el artículo 182 del Decreto 3192 de 1983.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 124 del Decreto 3192 de 1983, son las siguientes:

- a) Amonestación.*
- b) Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) Decomiso.*
- d) Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber a la implicada que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a la señora **Luz Sorelly David Macias** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.303.505, en su calidad de **Propietaria** del establecimiento denominado **Sorelly** ubicado en la Calle del Transporte del municipio de Belén de Bajirá Antioquia, con **MULTA** equivalente a **NOVENTA (90) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia**, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de

Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los 15 MAY 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

RESOLUCION No. 041379
15 MAY 2012

**Por medio de la cual se expide Autorización Sanitaria Favorable de una
Concesión de Agua para Consumo Humano.**

EL SECRETARIO SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA,
en uso de sus atribuciones legales que le confiere la Ley 9 de 1979 y el Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y

CONSIDERANDO:

1. Que la **SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA**, es la entidad competente para expedir la autorización Sanitaria Favorable de la Concesión de Agua para Consumo Humano, conforme a lo establecido en el artículo 28 del Decreto 1575 del 9 de mayo de 2007 expedido por el Ministerio de la Protección Social.
2. Que el señor **LUIS JAIME ARBELÁEZ OCAMPO**, con cédula de ciudadanía número 3.526.818 de Marinilla – Antioquia, Presidente de la Asociación de Usuarios Propietarios del Acueducto Multiveredal Pozo Inmaculada Milagrosa, mediante comunicado radicado en la Gobernación de Antioquia con el número 201200087760 del 13 de Abril de 2012, presentó solicitud para que se le expida

Autorización Sanitaria Favorable de la Concesión de Agua para Consumo Humano de las fuentes denominadas: **"Sin Nombre 1"**, cuya captación se encuentra localizada en las coordenadas planas: X: 1.177.870; Y: 869.080; ubicada en predios que pertenecen al municipio de Marinilla y al Acueducto Multiveredal; **"Sin Nombre 2"**, cuya captación se encuentra localizada en las coordenadas planas: X: 1.177.830; Y: 869.570; y **"El Pozo"**, cuya captación se encuentra localizada en las coordenadas planas: X: 1.177.940; Y: 868.760; ubicadas en predios que pertenecen al municipio de Marinilla, al señor Arturo Arango y al Acueducto Multiveredal en la vereda La Inmaculada en el municipio de Marinilla – Antioquia, para el abastecimiento de los sistemas No.1 y No. 2 del Acueducto Multiveredal Pozo, Inmaculada, Milagrosa en el municipio de Marinilla – Antioquia; administrado por la Asociación de Usuarios Propietarios del Acueducto Multiveredal Pozo Inmaculada Milagrosa.

3. Que el solicitante presentó la documentación de las caracterizaciones microbiológica y fisicoquímica de las fuentes según reportes del Laboratorio SEILAM S.A.S, identificados con los códigos 24416 – 1; 24416 – 2; 24416 – 3 y 24416 – 4; (Fisicoquímico y Microbiológico) conforme a muestras tomadas el 20 de Enero de 2012.
4. Que en la propuesta de tratamiento, allegada en el documento: "Propuesta Técnica de Sistemas de Tratamiento para Potabilización de Agua – Asociación de Usuarios Propietarios del Acueducto Multiveredal, Pozo, Inmaculada y Milagrosa – Municipio de Marinilla - Antioquia.", por la Ingeniera Ambiental VICTORIA ANDREA ARBOLEDA GÓMEZ de la firma FIBERGLASING S.A.S., se especifica que en cada una de las dos (2) Plantas de Tratamiento a implementar para los Sistemas de Acueducto No. 1 y No.2 se realizarán los siguientes procesos unitarios: *Aeración, Coagulación mezcla rápida, Floculación, Sedimentación de flujo horizontal, Filtración Lenta con lecho filtrante de arena y Desinfección con cloro.*
5. Que la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, después de revisar la documentación presentada por el solicitante y haber constatado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1575 de 2007, emitió concepto favorable para la expedición de la Autorización Sanitaria Favorable de la Concesión de Agua para consumo humano.

En mérito de lo antes dispuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER AUTORIZACION SANITARIA FAVORABLE DE CONCESION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO de las fuentes denominadas: **"Sin Nombre 1"**, cuya captación se encuentra localizada en las coordenadas planas: X: 1.177.870; Y: 869.080; ubicada en predios que pertenecen al municipio de Marinilla y al Acueducto Multiveredal; **"Sin Nombre 2"**, cuya captación se encuentra localizada en las coordenadas planas: X: 1.177.830; Y: 869.570; y **"El Pozo"**, cuya captación se encuentra localizada en las coordenadas planas: X: 1.177.940; Y: 868.760; ubicadas en predios que pertenecen al municipio de Marinilla, al señor Arturo Arango y al Acueducto Multiveredal en la vereda La Inmaculada en el municipio de Marinilla – Antioquia, para el abastecimiento de los sistemas No.1 y No. 2 del Acueducto Multiveredal Pozo, Inmaculada, Milagrosa en el municipio de Marinilla – Antioquia; administrado por la Asociación de Usuarios Propietarios del Acueducto Multiveredal Pozo Inmaculada Milagrosa.

ARTICULO SEGUNDO: ENVIAR copia de este acto a la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" para su conocimiento y competencia.

ARTICULO TERCERO: La presente Autorización Sanitaria Favorable de la Concesión de Agua para Consumo Humano, tendrá vigencia por el plazo que corresponda al periodo que otorga la Autoridad Ambiental, para la correspondiente Concesión de Agua para Consumo Humano.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución al interesado o su apoderado, haciéndoles saber que contra dicho acto proceden los recursos de reposición y apelación, ante el Secretario Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y el Gobernador de Antioquia, respectivamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación, conforme a lo establecido en el Decreto No. 01 de enero de 1984 (Código Contencioso Administrativo).

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Medellín, a los



LUZ MARÍA AGUDELO SUÁREZ

Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

041380

RESOLUCIÓN NÚMERO

DE

(15 MAY 2012)

"Por medio del cual se causa una novedad en la Planta de Cargos y se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la Administración Departamental"

LA SECRETARIA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, en ejercicio de la facultades que le confiere el Artículo 3° del Decreto Departamental 2576 del 14 de octubre de 2008 y el Artículo 5° del Decreto Departamental 2579 del 14 de octubre de 2008, y

CONSIDERANDO QUE:

- A. Mediante el artículo 3° del Decreto Departamental 2577 del 14 de octubre de 2008, se delega en el Secretario de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, la competencia para asignar a las diferentes dependencias los cargos de la planta global y efectuar los movimientos internos de todos los organismos, de acuerdo con los planes, programas y proyectos que desarrolle cada una de las dependencias que conforman la Administración Departamental Orden Central.
- B. El artículo 5° del Decreto Departamental 2579 del 14 de octubre de 2008, faculta a la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, para actualizar, modificar o adicionar el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.

- C. El Decreto Ley 785 de 2005, establece los criterios y la obligatoriedad para definir e incorporar en los manuales específicos de funciones y de requisitos las competencias laborales mínimas, para los diferentes empleos públicos de las entidades del orden territorial.
- D. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 2539 de julio 22 de 2005, "Por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los decretos ley 770 y 785 de 2005".
- E. El Gobierno Departamental expidió el Decreto 3120 de diciembre 2 de 2010, mediante el cual se adoptan las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de la Gobernación de Antioquia a la cual se aplican los Decretos Ley 2539 de 2005 y 785 de 2005.
- F. Mediante Decreto Departamental 0471 del 21 de febrero de 2006, se asimila la nomenclatura, clasificación y códigos de empleos, acorde con el Decreto-Ley 785 del 17 de marzo de 2005, reglamentario de la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004.

RESUELVE

ARTÍCULO 1° - Trasladar en la Planta Global de Cargos de la Administración, una plaza de empleo de Profesional Universitario con código 219 grado 02, NUC 2000003024, adscrito al grupo de trabajo Secretaría de Productividad y Competitividad - Dirección de Desarrollo Sectorial y Proyectos Productivos, la cual se encuentra vacante definitiva, para el grupo de trabajo Secretaría de Productividad y Competitividad - Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, y modificar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, así:

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES	
IDENTIFICACIÓN	
Nivel:	Profesional
Denominación del Empleo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Código:	219
Grado:	02
Nro. de Cargos:	Uno (1)
Dependencia:	Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:	Quien ejerza la supervisión Directa
ÁREA: SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD - DIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	
I. PROPÓSITO PRINCIPAL	
Asistir técnicamente a la comunidad del Departamento de Antioquia y a las Administraciones Municipales, sobre formas asociativas, cultura de proyectos, gestión empresarial y emprendimiento, con base en los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo y la Secretaría de Productividad y Competitividad, con el fin de promover la creación y fortalecimiento de unidades productivas con o sin ánimo de lucro.	
II. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES	
1. Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos, aplicando los conocimientos, técnicas y metodologías necesarias, para contribuir al cumplimiento de los objetivos del equipo de trabajo.	
2. Hacer seguimiento a los procesos, proyectos y programas bajo su responsabilidad, verificando la rigurosidad de los mismos, con el fin de resolver consultas y/o solicitudes tanto internas como externas.	

3. Elaborar los informes requeridos por los organismos de control y las demás entidades administrativas que los requieran, para reportar el avance en la ejecución de los programas y proyectos.
4. Desarrollar las acciones pertinentes para el logro de los objetivos y metas propuestas en la dependencia, de acuerdo con las competencias de su cargo, con el fin de contribuir al desempeño óptimo de la entidad.
5. Realizar las interventorías de los contratos que se le asignen, de acuerdo con la normatividad vigente, para hacer el seguimiento de la ejecución de los proyectos, velando porque los objetivos propuestos sean alcanzados.
6. Brindar información y asesoría técnica en la realización de trámites, aplicación de normas y en la elaboración de estudios, proyectos, planes y programas que se lleven a cabo en la dependencia, de acuerdo con las políticas y disposiciones vigentes.
7. Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación para el Departamento, aplicando los conocimientos, técnicas y metodologías de gestión tecnológica que permitan contribuir al cumplimiento de los objetivos planteados en el plan de desarrollo departamental.
8. Liderar procesos de prospectiva, vigilancia tecnológica, gestión de la propiedad intelectual y transferencia de tecnología, con el objetivo de mejorar la competitividad en las diferentes cadenas productivas definidas como prioritarias para el departamento de Antioquia.
9. Participar en el diseño de estrategias orientadas al desarrollo empresarial en las diferentes regiones del Departamento, a través del planteamiento de propuestas de transferencia y/o generación de tecnologías pertinentes, que permitan aumentar el tejido empresarial y mejorar la competitividad e innovación de las diferentes regiones.
10. Establecer contacto permanente con las demás secretarías de la gobernación para identificar retos de ciencia y tecnología relevantes a resolver logrando articular internamente los programas y proyectos a desarrollar de acuerdo a las metas establecidas en el plan de desarrollo departamental.
11. Emitir conceptos de viabilidad para la ejecución de proyectos con componentes de ciencia, tecnología e innovación, con el propósito de determinar la asignación de recursos del sector público o privado de acuerdo a las políticas vigentes.
12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.
13. Contribuir al mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión a través de la participación en todas las actividades, estrategias y programas definidos por la Dirección de Desarrollo Organizacional.

III. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. La elaboración de planes, programas y proyectos, aplicando los conocimientos, técnicas y metodologías necesarias contribuyen al cumplimiento de los objetivos del equipo de trabajo.
2. El seguimiento a los procesos, proyectos y programas se efectúa de manera rigurosa, permitiendo resolver las solicitudes tanto internas como externas.
3. Los informes requeridos por los organismos de control y las demás entidades administrativas que los requieran, se elaboran para reportar el avance en la ejecución de los programas y proyectos.
4. Las acciones pertinentes para el logro de los objetivos y metas propuestas en la dependencia, se desarrollan de acuerdo con las competencias de su cargo, con el fin de contribuir al desempeño óptimo de la entidad.
5. Las interventorías de los contratos que se le asignen, se realiza de acuerdo con la normatividad vigente, para hacer el seguimiento de la ejecución de los proyectos, velando porque los objetivos propuestos sean alcanzados.
6. La realización de trámites, aplicación de normas y la elaboración de estudios, proyectos, planes y programas se llevan a cabo brindando información y asesoría técnica de acuerdo con las políticas y disposiciones vigentes.

7. Se participa activamente en la elaboración de planes, programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación para el Departamento, aplicando los conocimientos, técnicas y metodologías de gestión tecnológica que contribuyen al cumplimiento de los objetivos planteados en el plan de desarrollo departamental.
8. Los procesos de prospectiva, vigilancia tecnológica, gestión de la propiedad intelectual y transferencia de tecnología, son liderados efectivamente, mejorando la competitividad en las diferentes cadenas productivas definidas como prioritarias para el departamento de Antioquia.
9. Se participa en el diseño de estrategias orientadas al desarrollo empresarial en las diferentes regiones del Departamento, a través del planteamiento de propuestas de transferencia y/o generación de tecnologías pertinentes, permitiendo aumentar el tejido empresarial y mejorando la competitividad e innovación de las diferentes regiones.
10. Se mantiene contacto con las demás secretarías de la gobernación identificando retos de ciencia y tecnología relevantes a resolver, articulando internamente los programas y proyectos a desarrollar de acuerdo a las metas establecidas en el plan de desarrollo departamental.
11. Se emiten conceptos de viabilidad para la ejecución de proyectos con componentes de ciencia, tecnología e innovación, determinando la asignación de recursos del sector público o privado de acuerdo a las políticas vigentes.
12. El cumplimiento de los demás compromisos y tareas asignadas por la autoridad competente.
13. La participación en el Sistema Integrado de Gestión contribuye al mantenimiento y mejoramiento continuo de todas sus actividades, estrategias y programas definidos por la Dirección de Desarrollo Organizacional.

IV. RANGO DE APLICACIÓN

De Tiempo o ambientales

- Permanentemente

De Lugar

- En el Departamento de Antioquia

De modo o variación

- Clientes internos y externos

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS 6 ESENCIALES

Área Administrativa

- Sistema integrado de gestión
- Elaboración, aplicación y seguimiento de indicadores
- Administración de recursos
- Normas de administración pública
- Coordinación de equipos de trabajo
- Temas técnicos del área de desempeño
- Formulación y evaluación de proyectos
- Mejoramiento continuo
- Estructuración de planes y proyectos estratégicos
- Indicadores de resultado
- Direccionamiento estratégico
- Dirección y administración de proyectos
- Plan de desarrollo departamental
- Formulación de estudios y proyectos
- Dirección de gestión integral de recursos
- Control interno
- Programas de gobierno locales y planes sectoriales

- Indicadores de gestión
- Gerencia de proyectos
- Planes de acción del área

Apoyo logístico

- Conocimiento del mercado productivo

Área de Publicidad y Comunicaciones

- Comunicaciones corporativas

Área de Sistemas

- Microsoft office word
- Sistemas de información del área de desempeño
- Sistema Mercurio
- Tecnología e investigación
- Nuevas tecnologías
- Técnicas de recolección de información
- Microsoft office power point
- Microsoft office excel
- TIC - Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Área del Medio Ambiente

- Administración de proyectos y recursos

Área del Secretariado

- Manejo y conservación de información

Área Financiera y Contable

- Control fiscal

Área Social, Derecho y Ciencias Políticas

- Marco Normativo vigente de contratación
- Derecho constitucional
- Legislación pública

VI. EVIDENCIAS

De conocimiento

- Evaluación de programas.

De producto

- Comunicaciones registradas en medios oficiales. (Oficios, mensajes electrónicos, piezas comunicacionales).
- Mejoras incorporadas a la gestión y/o ambiente laboral. (Documento, reportes de líderes o jefes, testimonios).
- Registros de acciones ejecutadas (Listas, videos, fotos, planos y/o formatos).
- Informes de gestión. (Documentos soportes).
- Registros de reuniones efectuadas. (Listas- Actas).
- Planes, cronogramas y programaciones de actividades. (Documento).
- Registros de seguimiento y control. (Listados, actas, certificados y/o diplomas)
- Materiales, muestras o productos del trabajo del evaluado registrados en medio físico (papel o magnético). (Informes, proyectos, bases de datos, documentos).
- Actas de actividades programadas. (Actas).

De desempeño

- Indicadores de PQRS relacionados con la Dependencia.

- Informes resultantes de aplicar la técnica de observación del desempeño, en tiempo real o simulado. (Informe, reporte)
- Porcentaje de ejecución logrado en proyectos, planes y programas asignados a la Dependencia.
- Resultados de los proyectos, planes y programas implementados por la Dependencia.
- Proyectos Aprobados
- Manifestaciones probadas positivas o negativas de agentes internos o externos frente a la prestación del servicio. (Felicitaciones, Testimonios, Peticiones, Quejas, Reclamos, Registros fotográficos).

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Título de formación profesional en: Economía y Negocios Internacionales, Economía y Finanzas, Negocios Internacionales, Administración de Empresas y Finanzas, Administración de Empresas, Ingeniería Administrativa, Administración Empresarial y Pública, Administración de Negocios, Dirección y Administración de Empresas, Administración de Empresas Generales, Ingeniería Administrativa y de Finanzas, Administración de Empresas con Énfasis en Economía Solidaria, Administración de empresas y negocios internacionales, Economía General, Administración pública, Economía Industrial, Economía de Empresas, Economía, Economía y Desarrollo, Administración Empresarial, Economía empresarial, Economía y Administración.

Veinticuatro (24) meses de Experiencia Profesional Relacionada.

VIII. EQUIVALENCIAS

Aplican equivalencias según los estatutos de ley.

IX. COMPETENCIAS

Aplican las competencias correspondientes al nivel del cargo según el decreto departamental 3120 de 2010.

ARTÍCULO 2° - De la presente Resolución, se enviará copia a la Dirección de Desarrollo Organizacional y a la Dirección de Personal de la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


MARIA VICTORIA GÓMEZ RESTREPO

Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional

041381

RESOLUCIÓN NÚMERO

DE

(15 MAY 2012)

"Por medio de la cual se modifica parcialmente el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la Administración Departamental"

LA SECRETARIA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, en ejercicio de las facultades que le confiere el Artículo 3° del Decreto Departamental 2577 del 14 de octubre de 2008 y el Artículo 5° del Decreto Departamental 2579 del 14 de octubre de 2008, y

**CONSIDERANDO:**

- A. Que mediante el artículo 3° del Decreto Departamental 2577 del 14 de octubre de 2008, se delega en el Secretario de Despacho de la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, la competencia para asignar a las diferentes dependencias los cargos de la planta global y efectuar los movimientos internos de todos los organismos, de acuerdo con los planes, programas y proyectos que desarrolle cada una de las dependencias que conforman la Administración Departamental del Orden Central.
- B. Que el artículo 5° del Decreto Departamental 2579 del 14 de octubre de 2008, faculta a la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, para actualizar, modificar o adicionar el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.
- C. Que el Decreto Ley 785 de 2005, establece los criterios y la obligatoriedad para definir e incorporar en los manuales específicos de funciones y de requisitos, las competencias laborales mínimas para los diferentes empleos públicos de las entidades del orden territorial.
- D. Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2539 de julio 22 de 2005, "Por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los decretos ley 770 y 785 de 2005".
- E. Que mediante el Decreto Departamental 0471 del 21 de febrero de 2006, se asimila la nomenclatura, clasificación y códigos de empleos, acorde con el Decreto-Ley 785 del 17 de marzo de 2005, reglamentario de la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004.
- F. Que el perfil Comunicación Social - Periodismo, es a fin con las funciones y el perfil definido inicialmente.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1° - Modificar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de un cargo de Profesional Universitario, código 219 grado 02, NUC 2000004878, adscrito a la planta global de la Administración Departamental, en el grupo de trabajo especificado, así:

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES**IDENTIFICACIÓN**

Nivel:	Profesional
Denominación del Empleo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Código:	219
Grado:	02
Nro. de Cargos:	Quinientos cincuenta y tres (553)
Dependencia:	Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:	Quien ejerza la supervisión Directa

ÁREA: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA - DIRECCIÓN DE FACTORES DE RIESGO

2000004878 219-02

I. PROPÓSITO PRINCIPAL

Identificar los niveles de aceptación o riesgo en la difusión de los programas de la Dirección, monitoreando los medios de comunicación y medios alternativos, con el propósito de realizar recomendaciones que sirvan como insumo en la toma de decisiones por parte de la dependencia, para impactar positivamente a la ciudadanía.

II. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos, aplicando los conocimientos, técnicas y metodologías necesarias, para contribuir al cumplimiento de los objetivos del equipo de trabajo.
2. Hacer seguimiento a los procesos, proyectos y programas bajo su responsabilidad, verificando la rigurosidad de los mismos, con el fin de resolver consultas y/o solicitudes tanto internas como externas.

3. Elaborar los informes requeridos por los organismos de control y las demás entidades administrativas que los requieran, para reportar el avance en la ejecución de los programas y proyectos.
4. Desarrollar las acciones pertinentes para el logro de los objetivos y metas propuestas en la dependencia, de acuerdo con las competencias de su cargo, con el fin de contribuir al desempeño óptimo de la entidad.
5. Brindar información y asesoría técnica en la realización de trámites, aplicación de normas y en la elaboración de estudios, proyectos, planes y programas que se lleven a cabo en la dependencia, de acuerdo con las políticas y disposiciones vigentes.
6. Realizar las interventorías de los contratos que se le asignen, de acuerdo con la normatividad vigente, para hacer el seguimiento de la ejecución de los proyectos, velando porque los objetivos propuestos sean alcanzados.
7. Formular el plan de comunicaciones de la dependencia, identificando las temáticas de Gobierno que deben difundirse por los diversos medios de comunicación y medios alternativos, con el fin de informar el seguimiento, alcance y logros del plan de desarrollo.
8. Coordinar en conjunto con los equipos zonales las estrategias educativas y de comunicación, que permitan difundir y aplicar las recomendaciones tendientes a disminuir el impacto de las enfermedades asociadas a los factores de riesgo del ambiente, consumo, vectores y zoonosis.
9. Crear y desarrollar las estrategias y medios educativos y de comunicación que permitan difundir la normatividad sanitaria y prevenir los factores de riesgo asociados al consumo, ambiente, vectores y zoonosis.
10. Asesorar a las Instituciones Prestadoras de servicios de Salud de los municipios, en todo lo relacionado con la información, campañas y mensajes relacionados con los factores de riesgo que afectan la salud de la población de acuerdo a las políticas vigentes.
11. Garantizar el uso adecuado de los materiales e insumos entregados, optimizando los recursos propuestos en los contratos efectuados para la difusión de las acciones y estrategias de promoción y prevención.
12. Aplicar las directrices y protocolos emanados por el Ministerio de Salud y Seguridad Social, Instituto Nacional de Salud o similar relacionados con el manejo de la información, de acuerdo a la normatividad vigente.
13. Contribuir al mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión a través de la participación en todas las actividades, estrategias y programas definidos por la Dirección de Desarrollo Organizacional.
14. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

III. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. La elaboración de planes, programas y proyectos, aplicando los conocimientos, técnicas y metodologías necesarias contribuyen al cumplimiento de los objetivos del equipo de trabajo.
2. El seguimiento a los procesos, proyectos y programas se efectúa de manera rigurosa, permitiendo resolver las solicitudes tanto internas como externas.
3. Los informes requeridos por los organismos de control y las demás entidades administrativas que los requieran, se elaboran para reportar el avance en la ejecución de los programas y proyectos.
4. Las acciones pertinentes para el logro de los objetivos y metas propuestas en la dependencia, se desarrollan de acuerdo con las competencias de su cargo, con el fin de contribuir al desempeño óptimo de la entidad.
5. La realización de trámites, aplicación de normas y la elaboración de estudios, proyectos, planes y programas se llevan a cabo brindando información y asesoría técnica de acuerdo con las políticas y disposiciones vigentes.



6. Las interventorias de los contratos que se le asignen, se realiza de acuerdo con la normatividad vigente, para hacer el seguimiento de la ejecución de los proyectos, velando porque los objetivos propuestos sean alcanzados.
7. El plan de comunicaciones de la dependencia, es formulado, identificando las temáticas de Gobierno que deben difundirse por los diversos medios de comunicación y medios alternativos, informando de esta manera sobre el seguimiento, alcance y logros del plan de desarrollo.
8. En conjunto con los equipos zonales se coordinan las estrategias educativas y de comunicación, que permiten difundir y aplicar las recomendaciones tendientes a disminuir el impacto de las enfermedades asociadas a los factores de riesgo del ambiente, consumo, vectores y zoonosis.
9. Se crean y desarrollan las estrategias y medios educativos y de comunicación que permiten difundir la normatividad sanitaria y prevenir los factores de riesgo asociados al consumo, ambiente, vectores y zoonosis.
10. Se asesora a las Instituciones Prestadoras de servicios de Salud de los municipios, en los aspectos relacionados con la información, campañas y mensajes relacionados con los factores de riesgo que afectan la salud de la población de acuerdo a las políticas vigentes.
11. Se garantiza el uso adecuado de los materiales e insumos entregados, optimizando los recursos propuestos en los contratos efectuados para la difusión de las acciones y estrategias de promoción y prevención.
12. Las directrices y protocolos emanados por el Ministerio de Salud y Seguridad Social, Instituto Nacional de Salud o similar relacionados con el manejo de la información, son aplicadas de acuerdo a la normatividad vigente.
13. La participación en el Sistema Integrado de Gestión contribuye al mantenimiento y mejoramiento continuo de todas sus actividades, estrategias y programas definidos por la Dirección de Desarrollo Organizacional.
14. El cumplimiento de los demás compromisos y tareas asignadas por la autoridad competente.

IV. RANGO DE APLICACIÓN**De Tiempo o ambientales**

- Permanentemente

De Lugar

- En el Departamento de Antioquia

De modo o variación

- Clientes internos y externos

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ó ESENCIALES**Área Administrativa**

- Sistema integrado de gestión
- Elaboración, aplicación y seguimiento de indicadores
- Normas de administración pública
- Temas técnicos del área de desempeño
- Análisis de indicadores
- Procedimiento para la inspección, vigilancia y control
- Mejoramiento continuo
- Indicadores de resultado
- Seguimiento evaluación proyectos de inversión
- Plan de desarrollo departamental
- Formulación de estudios y proyectos
- Control interno

- Indicadores de gestión
- Normas, directrices y políticas institucionales
- Planes de acción del área

Área de la Educación

- Pedagogía y didáctica

Área de la Salud

- Sistema nacional de vigilancia en salud pública - SIVIGILA

Área de Publicidad y Comunicaciones

- Comunicaciones corporativas
- Diseño y diagramación de piezas comunicacionales
- Relaciones públicas
- Medios de comunicación
- Comunicación organizacional

Área de Sistemas

- Microsoft office word
- Sistemas de información del área de desempeño
- Sistema Mercurio
- Técnicas de recolección de información
- Microsoft office power point
- Microsoft office excel
- TIC - Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Área del Medio Ambiente

- Estrategias de intervención ambiental
- Escala de riesgos y tipos de riesgos naturales
- Administración de proyectos y recursos

Área del Secretariado

- Guías para presentación de informes de la Institución
- Manejo y conservación de información

Área Financiera y Contable

- Control fiscal
- Análisis, ejecución y seguimiento de presupuesto público

Área Social, Derecho y Ciencias Políticas

- Marco Normativo vigente de contratación

VI. EVIDENCIAS

De conocimiento

- Evaluación de programas.

De producto

- Comunicaciones registradas en medios oficiales. (Oficios, mensajes electrónicos, piezas comunicacionales).
- Mejoras incorporadas a la gestión y/o ambiente laboral. (Documento, reportes de líderes o jefes, testimonios).
- Registros de acciones ejecutadas (Listas, videos, fotos, planos y/o formatos).
- Informes de gestión. (Documentos soportes).
- Registros de reuniones efectuadas. (Listas- Actas).

- Planes, cronogramas y programaciones de actividades. (Documento).
- Registros de seguimiento y control. (Listados, actas, certificados y/o diplomas)
- Materiales, muestras o productos del trabajo del evaluado registrados en medio físico (papel o magnético). (Informes, proyectos, bases de datos, documentos).
- Actas de actividades programadas. (Actas).

De desempeño

- Indicadores de PQRS relacionados con la Dependencia.
- Informes resultantes de aplicar la técnica de observación del desempeño, en tiempo real o simulado. (Informe, reporte)
- Porcentaje de ejecución logrado en proyectos, planes y programas asignados a la Dependencia.
- Nivel de calificación obtenido en la evaluación del desempeño de los servidores públicos asignados a la Dependencia.
- Resultados de los proyectos, planes y programas implementados por la Dependencia.
- Proyectos Aprobados
- Manifestaciones probadas positivas o negativas de agentes internos o externos frente a la prestación del servicio. (Felicitaciones, Testimonios, Peticiones, Quejas, Reclamos, Registros fotográficos).

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Título de formación profesional en: Comunicación Social Enfoque en Comunicación Comunitaria, Comunicación Social, Planeación y Desarrollo Social, Administración de Desarrollo Social, Planeación para el Desarrollo Social, Comunicación Social - Periodismo, Servicio Social.

Veinticuatro (24) meses de Experiencia Profesional Relacionada.

VIII. EQUIVALENCIAS

Aplican equivalencias según los estatutos de ley.

IX. COMPETENCIAS

Aplican las competencias correspondientes al nivel del cargo según el decreto departamental 3120 de 2010.

ARTÍCULO 2°- De la presente Resolución, se enviará copia a la Dirección de Desarrollo Organizacional y a la Dirección de Personal de la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


MARÍA VICTORIA GÓMEZ RESTREPO

Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional

RESOLUCIÓN N° 041382

15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE
ANTIOQUIA,**



En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 18 de marzo de 2010, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia al establecimiento denominado **Billares Sandy** ubicado en el Barrio La Colina frente a la oficina de EPM del municipio de Belén de Bajirá, Antioquia, cuya **Propietaria** es la señora **Sandra Patricia Orozco Bonolis** identificada con cédula de ciudadanía No. 37.160.911.

Que mediante Auto No. 23089 del 24 de noviembre de 2011, se inició la presente investigación y por Auto No. 96 del 10 de enero de 2012 se formuló cargos a la señora **Sandra Patricia Orozco Bonolis**, en su calidad de **Propietaria** del establecimiento denominado **Billares Sandy**, por infringir los artículos 417 y primer inciso del artículo 418 de la Ley 9 de 1979 y literal a numeral 6 artículo 2 del Decreto 3192 de 1983.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente a la involucrada, para que ejerciera su derecho de defensa, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual presentó los respectivos descargos dentro del término de ley.

Que mediante auto No. 548 del 16 de marzo de 2012, se rechazaron las pruebas solicitadas con el memorial de los descargos radicado No. 201200024304 del 1 de febrero de 2012.

Que ante la negativa de las pruebas se le concedió a la implicada el recurso de apelación, el cual debía interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, pero la señora **Sandra Patricia Orozco Bonolis**, no hizo uso del derecho concedido, dejando inactivo su derecho de defensa.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con el parágrafo del artículo 576 de la Ley 9 de 1979, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

La conducta objeto de aplicación de incautación el día 18 de marzo de 2010 es una infracción a los artículos 417 y primer inciso del artículo 418 de la Ley 9 de 1979, literal a numeral 6 artículo 2 del Decreto 3192 de 1983, por lo que al comprobar su violación se procedió al decomiso de los productos que constituyen evidencia física de la conducta infractora, que por demás se encuentra tipificada en el artículo 109 del Decreto 3192 de 1983, cuando establece que el Ministerio de Salud y los Servicios Seccionales de Salud, están en la obligación de ejercer control y vigilancia sanitaria, sobre las fabricas de alcohol y bebidas alcohólicas y sobre las bebidas alcohólicas para garantizar las condiciones sanitarias, de los procesos de elaboración, hidratación, envase, distribución, importación y exportación se procederá al decomiso del producto que no cumpla con las normas sanitarias vigentes.

La responsabilidad desplegada el día de los hechos, se encuentra enmarcada dentro de las normas de autenticidad y de las bebidas alcohólicas, específicamente sobre requisitos físico químicos, grado alcoholímetro, color, características organolépticas y empaque por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal, así lo manifiestan los artículos 576 de la Ley 9 de 1979, en los artículos 109 y siguientes del Decreto 3192 de 1983.

La Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3192 de 1983 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

Frente lo anterior manifiesta la implicada que el licor lo compró en otro establecimiento del mismo corregimiento, que nunca notó que estuviera adulterado, considera que fue asaltada en su buena fe, porque ella no tiene la capacidad para distinguir cuando el licor está falsificado, este factor será tenido en cuenta al momento de imponer la sanción como factor atenuante.

La actividad que realiza la señora **Sandra Patricia Orozco Bonolis**, en el establecimiento denominado **Billares Sandy**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de licores por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Por lo que es su responsabilidad, no sólo adquirir los productos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización, a través de una adecuada recepción y revisando que cada producto tenga la información correspondiente a cantidad de unidades, número de lote, registro sanitario, fecha de vencimiento y su procedencia.

Es por ello por lo que los motivos de inconformidad planteados en el escrito de descargos carecen en absoluto de soporte no sólo probatorio sino legal, toda vez que como **Propietario** le es exigible, de acuerdo con la ley, una mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, por la trascendencia social que representa la comercialización, al por mayor o al menudeo, de licores, al estar de por medio tal como se expuso con antelación la salud de la población.

Tener Productos Fraudulentos, **sin importar la cantidad que sea**, ponen en riesgo y en grave peligro la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, a través de la Dirección Factores de Riesgo, tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la *"producción, **distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...**"* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en **la prevalencia del interés general.**"

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

Cuando se trata de investigaciones administrativas, corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de **culpa grave** de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión, en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factores atenuantes para la señora **Sandra Patricia Orozco Bonolis**, los buenos antecedentes y la ignorancia invencible según lo contemplado en el artículo 182 del Decreto 3192 de 1983.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 124 del Decreto 3192 de 1983, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber a la implicada que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a la señora **Sandra Patricia Orozco Bonolis** identificada con cédula de ciudadanía No. 37160911, en su calidad de **Propietaria** del establecimiento denominado **Billares Sandy** ubicado en la Barrio La Colina frente a la oficina de EPM del municipio de Belén de Bajirá Antioquia, con **MULTA** equivalente a **CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los 15 MAY 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 041383
15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE
ANTIOQUIA,**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 27 de septiembre de 2010, la Policía Nacional del Municipio de Don Matías realizó una incautación en el **Vehículo de placas TOD 808**, cuyo **Propietario** es el señor **Jorge Enrique Arroyave Valencia** identificado con cédula de ciudadanía No. 15.323.878; y lo puso a disposición del Técnico del Área de la Salud adscrito a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia quien procedió a aplicar medida sanitaria de seguridad consistente en el decomiso y posterior desnaturalización de ochenta (80) kilos de carnes que no cumplían con las condiciones sanitarias para su comercialización.

Que mediante Auto No. 76 del 10 de enero de 2012, se inició la presente investigación y por Auto No. 546 del 16 de marzo de 2012 se formuló cargos al señor **Jorge Enrique Arroyave Valencia**, en su calidad de **Propietario del Vehículo de placas TOD 808**, por infringir los artículos 278, 279, 304, 305 y 341 de la Ley 9 de 1979.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente al involucrado, para que ejerciera su derecho de defensa, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual presentó los respectivos descargos dentro del término de ley.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 27 de septiembre de 2010, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con el artículo 576 de la Ley 9 de 1979, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

Los artículos 278, 279 y 341 de la Ley 9 de 1979, han determinado que los vehículos destinados para el transporte de carnes deberán ser diseñados y contruidos en forma que protejan los productos de contaminaciones y aseguren su correcta conservación, para lo cual deberán contar con equipos adecuados y un sistema que permita mantener los productos a una altura que impida su contacto con el piso.

Respecto a la violación a los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, dichos artículos establece la prohibición de tener o expender productos no aptos para consumo humano dentro de los cuales se encuentran todos lo que por sus características anormales puedan afectar la salud del consumidor, en virtud de ello se considera que los alimentos transportados sin las adecuadas condiciones sanitarias no son comercializables.

La Ley 9ª de 1979 es una norma de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza el señor **Jorge Enrique Arroyave Valencia**, en su **Vehículo de placas TOD 808**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y

control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Frente lo anterior, manifiesta el implicado en sus descargos que como conductor de vehículos de transporte público, siempre se ha caracterizado por ser respetuoso del ordenamiento jurídico; en cuanto a la carne decomisada, manifiesta que nunca conoció el contenido de lo que se estaba transportando en la caja, que dicha caja no fue transportada con conocimiento de la empresa transportadora, que fue recogida en el camino y que el remitente le manifestó que era un mercado y que de buena fe creyó en la información que le dieron.

Para evitar situaciones como las ocurridas, se compromete a tomar las medidas necesarias para que dichos hechos no se vuelvan a presentar y solicita se le imponga una sanción que sea la mínima, en razón de que no tenía conocimiento de que no se puede transportar este tipo de alimentos en los vehículos de transporte público.

Ante sus argumentos es importante hacerle saber al implicado que el artículo 9º del Código Civil Colombiano, establece que “**La ignorancia de la ley no sirve de excusa**”. Y en tal sentido, en uno de los múltiples pronunciamientos que sobre éste aspecto ha hecho la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia de Sala Plena de marzo 30 de 1978, señaló que “*Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora, equivale a establecer un privilegio a su favor, violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos jurídico*”. Se ha hecho ésta reseña legislativa para concluir que bajo ninguna circunstancia le asiste justificación alguna al implicado para pretender evadir su responsabilidad en los hechos, además que el reglamento de la Terminal de Transporte prohíbe el transporte de alimentos

La Corte Constitucional en Sentencia T-381 de septiembre 14 de 1993, analizando el principio de Inocencia y el de la Buena Fe, determinó:

“...el principio de la Buena Fe, (C:N: art. 83) en efecto no consiste en que el Estado deba someterse sin análisis ni posibilidad de evaluación a lo afirmado por los particulares. Implica sí que las autoridades presuman – juris tantum – que las personas actúan ante ellas de buena fe, pero siempre con la posibilidad correlativa de desvirtuar la presunción, con arreglo a derecho, exigiendo entonces las consiguientes responsabilidades por violación de la Constitución o de las leyes...”

En cuanto al segundo argumento que aduce el implicado, se le puede concluir del acervo probatorio que en el **Vehículo de placas TOD 808** Jorge Enrique Arroyave Valencia, se infringió la Ley 9ª de 1979, en lo respectivo al transporte de productos para el consumo humano y específicamente en lo relacionado con la conservación y almacenamiento de los alimentos. Tener Productos que incumplan con las normas de transporte, **sin importar la cantidad que sea**, ponen en riesgo y en grave peligro la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el

deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Es por ello por lo que los motivos de inconformidad planteados en el escrito de descargos carecen en absoluto de soporte no sólo probatorio sino legal, toda vez que como **Propietario** del vehículo le es exigible, de acuerdo con la ley, una mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, por la trascendencia social que representa el transporte de alimentos, al estar de por medio tal como se expuso con antelación la salud de la población.

La responsabilidad imputada frente a las irregularidades encontradas en se le atribuyen al investigado, a título de **culpa grave**, por la imprevisión, la negligencia y el descuido en el manejo de los productos y por ende, del establecimiento como tal, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes, al tenor del artículo 63 del Código Civil. No obstante al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante para el señor **Jorge Enrique Arroyave Valencia** el hecho de no haber sido sancionado antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la “**producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...**” Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en **la prevalencia del interés general.**”

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

Por todo lo anterior, es necesario hacerles saber a los implicados que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **Jorge Enrique Arroyave Valencia** identificado con cédula de ciudadanía No. 15.323.878, en su calidad de **Propietario del Vehículo de placas TOD 808**, con **MULTA** equivalente a **OCHENTA (80) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia**, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los 15 MAY 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA
Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia



RESOLUCIÓN N° 041384
15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA
SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que los días 27 de abril de 2009, 19 de febrero, 23 de abril, 31 de mayo, 10 de julio, 6 de agosto de 2010 y 7 de marzo de 2011, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visitas oficiales de inspección y vigilancia a la **Plaza de Mercado** ubicada en el Barrio 20 de Julio del municipio de Arboletes, Antioquia, de Propiedad del Municipio de Arboletes, cuyo Representante Legal, o quien haga sus veces, es el señor **Nelson Mestra Cárdenas** identificado con cédula de ciudadanía No. 78716724.

Que mediante Auto No. 22762 del 1 de noviembre de 2011, se inició la presente investigación y por Auto No. 23086 del 24 de noviembre de 2011 se formuló cargos al señor **Nelson Mestra Cárdenas**, en su calidad de **Representante Legal**, o quien haga sus veces, de la **Plaza de Mercado**, por infringir el Literal d del artículo 84, artículos 90, 92, 196, 207 y 237 de la Ley 9 de 1979.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente al involucrado, para que ejerciera su derecho de defensa, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual presentó los respectivos descargos dentro del término de ley.

Que mediante auto No. 23339 del 19 de diciembre de 2011, se decretó como prueba realizar una visita a la plaza de mercado, para verificar el cumplimiento de los requerimientos dejados en las visitas realizadas los días 27 de abril de 2009, 19 de febrero, 23 de abril, 31 de mayo, 10 de julio, 6 de agosto de 2010 y 7 de marzo de 2011.

Que la visita ordenada por el auto de pruebas fue realizada por el Técnico Área de la Salud adscrito al municipio de Arboletes el día 9 de marzo de 2012, donde se evidenció que aún no se ha dado cumplimiento a los requerimientos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Antes de entrar a resolver el fondo del asunto, se hace necesario aclarar que las infracciones evidenciadas en visita realizada el día 27 de abril de 2009, no serán tenidas en cuenta al momento de imponer la sanción, ya que le operó el fenómeno de la caducidad. Al respecto el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo estipula que *"salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas"*.

Por estar limitado en el tiempo el ejercicio de la acción por parte de la Administración, lo cual no requiere de consideración alguna diferente al simple transcurso de aquel, se hace necesario entonces dar cabal aplicación a lo dispuesto en la norma, no obstante se seguirá el trámite para las visitas realizadas los días 21 de julio de 2009 y 21 de octubre de 2010.

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con los artículos 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

Como se anotó anteriormente, en visitas realizadas los días 9 de febrero, 23 de abril, 31 de mayo, 10 de julio, 6 de agosto de 2010 y 7 de marzo de 2011 a la **Plaza de Mercado**, y de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 69 y 70 del Decreto 3075 de 1997, se dejaron requerimientos los cuales constan en las respectivas actas de visita, por el incumplimiento a los requisitos higiénico locativos en el establecimiento en general, específicamente por el deterioro en paredes, pisos y techos, los cables eléctricos se encuentran sin canalizar, no contar con unidad sanitaria, no realizar control de roedores, la presencia de animales domésticos al interior del establecimiento, los basureros no tienen capacidad de almacenamiento de residuos, no contar con extintor, ni botiquín de primeros auxilios, en general por el desaseo de la plaza.

Es pertinente aclararle al implicado que para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos se debe contar con unas condiciones higiénico - locativas, las cuales han sido reglamentadas con el propósito de garantizar la calidad y proteger la salud de la población y que están contenidas en el Literal d del artículo 84, artículos 90, 92, 196, 207 y 237 de la Ley 9 de 1979.

La Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que se realiza en la **Plaza de Mercado**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación,

procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la “**producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...**” Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en **la prevalencia del interés general.**”

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

Frente lo anterior, manifiesta el implicado que a la fecha la **Plaza de Mercado** no viene funcionando, el pensamiento de su administración es cerrarla definitivamente y reubicarla, el problema con el establecimiento viene desde hace mas de 5 años, cuando él no se encontraba al frente de la alcaldía y en el poco tiempo que ha estado como alcalde es poco lo que ha podido hacer con las obligaciones de la entidad.

Así mismo manifiesta que en las normas que sustentan el auto de cargos, no se encuentran en el campo del derecho punitivo, pues se requiere en la formulación de cargos se demuestre que el implicado actuó de mala fe, produciéndose un dolo así sea mínimo. Además que es evidente que los anteriores alcaldes incumplieron con sus obligaciones, no se le puede endilgar toda la culpa ya que el no conoció las visitas.

Para concluir menciona el implicado que el presente proceso solo debe afectar al municipio y que no debe ser de carácter punitivo, pero que es doloroso que por la negligencia de los burgomaestres anteriores se vaya a sancionar un municipio tan golpeado, ya que la tasación de la sanción se vería reflejada en las arcas municipales.

Inicialmente se debe aclarar que por ser el **Municipio de Arboletes** una persona jurídica, significando ello que es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, y de ser representada judicial y extrajudicialmente, que ejerce sus atributos a través de un representante legal, quien actúa a su nombre, es por eso que la presente investigación se inició en contra del Representante legal del municipio, **o quien haga sus veces**, que para la fecha de notificar las instancias procesales era el señor **Nelson Mestra Cárdenas**.

En cuanto al tema de la responsabilidad administrativa, ésta surge de la comisión de un hecho considerado por la Ley como infracción, lo que supone la concurrencia de la culpabilidad y de la antijuricidad en su autor, se dice entonces que es responsable el que esta comprometido a asumir determinada conducta o quien debe sufrir las consecuencias del incumplimiento de una obligación determinada.

Profundizando más en este tema, se debe analizar la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, que a diferencia de la responsabilidad penal, en materia administrativa se encuentra circunscrita al ámbito del *jus puniendi* de la administración, centrándose en el hecho de que las personas jurídicas son responsables administrativamente por el principio *societas delinquere non potest*, ósea que son sujetos activos del ilícito y pasivos de la sanción, pero que quede claro, únicamente en materia administrativa.

Es así entonces como la capacidad de infracción de las personas jurídicas pueden encontrarse recurriendo a la teoría orgánica: la acción de los órganos de la persona jurídica es jurídicamente la acción de esta persona y la voluntad de los órganos no constituye mas que exteriorización de la voluntad de la persona jurídica, a la cual se le deben imputar los efectos de dichos actos, de la misma manera que los actos ejecutados por los órganos de las personas físicas son actos de éstas¹.

En el ámbito administrativo de las personas jurídicas (como también ocurre en las personas naturales) se puede ser responsable por la simple atribuibilidad de la conducta tipificada como infracción, a título de dolo o culpa, que para el *sub judice* la responsabilidad imputada frente a las irregularidades encontradas en las visitas realizadas al establecimiento, se le atribuye al investigado, a título de **culpa grave**, por la imprevisión, la negligencia y el descuido en el manejo del establecimiento como tal, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes, al tenor del artículo 63 del Código Civil.

En cuanto a la falta de tipicidad en los cargos imputados, es importante señalar, lo que la jurisprudencia ha dicho con relación a las facultades sancionatorias reconocidas a las autoridades administrativas, que como se verá, se convierten en una medida que puede adoptar la administración para constreñir o apremiar a los particulares a darle cumplimiento a la normatividad sanitaria, y cuya aplicación demanda la observancia de los principios y garantías que rigen el debido proceso.

Es entonces como, la Corte Constitucional en Sentencia C-160 de 29 de abril de 1998 manifestó:

“El poder sancionador que se ha reconocido a la administración, tiene como fundamento el jus puniendi que ostenta el Estado. Potestad ésta, que no sólo es ejercida por los jueces, sino por diversos funcionarios de la administración, que, para lograr el cumplimiento de las funciones que les han sido asignadas, deban hacer uso de éste, para garantizar el adecuado funcionamiento del aparato estatal.

(...)

“La no total aplicabilidad de las garantías del derecho penal al campo administrativo obedece a que mientras en el primero se protege el orden social en abstracto y su ejercicio persigue fines retributivos, preventivos y resocializadores, la potestad sancionatoria de la administración se orienta más a la propia protección de su organización y funcionamiento, lo cual en ocasiones justifica la aplicación restringida de estas garantías - quedando a salvo su núcleo esencial - en función de la importancia del interés público amenazado o desconocido.” (Corte Constitucional, sentencia T-145 de 1993, Magistrado ponente, doctor Eduardo Cifuentes Muñoz).

[. . .] El poder coactivo de la administración, en el ámbito de estas infracciones, tiene características muy particulares, que impiden su asimilación con el poder punitivo que, en el ámbito penal, ejerce el Estado. Lo anterior, empero, no significa que los derechos y garantías fundamentales del administrado sean desconocidos, pues,

¹ Ossa Arbeláez, Jaime. Derecho administrativo Sancionador, Bogotá. Legis Editores. 2009

expresamente, se encuentran garantizados, en el artículo 29 de la Constitución. (...) "

Posteriormente, en el mismo sentido, se pronunció la Corte en Sentencia C-1161 de 6 de septiembre de 2000, cuando tuvo oportunidad de reafirmar:

"[. . .] Esta Corporación tiene bien establecido que si bien el derecho penal no es más que una de las especies del derecho sancionador, sin embargo los principios penales se aplican, *mutatus mutandi*, a los distintos ámbitos en donde opera el derecho sancionador. En efecto, en reiterada jurisprudencia esta Corporación ha establecido que los principios del derecho penal -como forma paradigmática de control de la potestad punitiva- se aplican, con ciertos matices, a todas las formas de actividad sancionadora del Estado. Y es que la Constitución es clara en señalar que el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (CP art. 29). Por consiguiente, el actor tiene razón en que la definición de un infracción debe respetar los principios de legalidad y proporcionalidad que gobiernan la actividad sancionadora del Estado."

Conforme a las sentencias transcritas, es claro entonces, que para efectos del derecho administrativo sancionatorio, rigen los mismos principios aplicables en materia penal, no obstante, no se puede pasar por alto que su aplicación e interpretación, se deben hacer de manera restrictiva y sin desnaturalizar las características de cada una de las áreas en las que el Estado, ejerce esta clase de atribuciones.

Ahora, en cuanto a los principios del derecho punitivo que se ha reconocido deben aplicarse en materia administrativa, es preciso destacar el de legalidad, tipicidad, proporcionalidad y razonabilidad. Respecto a los dos primeros, la jurisprudencia antes citada, precisó en la misma Sentencia C-1161 de 6 de septiembre de 2000:

"[. . .] El principio de legalidad, propio del estado de derecho y, por ende, aplicable a todo el ordenamiento normativo, donde se haga uso del poder punitivo, impone que, para la aplicación de una sanción, exista un precepto en donde se describa claramente la conducta reprochable (tipicidad)."

"[. . .] Uno de los principios esenciales en el derecho sancionador es el de la legalidad, según el cual las conductas sancionables no sólo deben estar descritas en norma previa (tipicidad) sino que, además, deben tener un fundamento legal, por lo cual su definición no puede ser delegada en la autoridad administrativa. Además, es claro que el principio de legalidad implica también que la sanción debe estar predeterminada ya que debe haber certidumbre normativa previa sobre la sanción a ser impuesta pues, como esta Corporación ya lo había señalado, las normas que consagran las faltas deben estatuir "también con carácter previo, los correctivos y sanciones aplicables a quienes incurran en aquéllas"

Y, en relación con los dos últimos principios mencionados, ha señalado la Corte Constitucional en la sentencia C-160 de 1998, ya anotada:

"[. . .] Es claro, entonces, que las sanciones que puede imponer la administración, deben estar enmarcadas en criterios de

proporcionalidad y razonabilidad que legitimen su poder sancionador. Por tanto, en el caso en estudio, es necesario concluir que no todo error cometido en la información que se remite a la administración, puede generar las sanciones consagradas en la norma acusada."

Ahondando más en el análisis de la falta de tipicidad de las norma imputadas al señor **Nelson Mestra Cárdenas**, quien manifestó que se le ha violado el debido proceso, por la ausencia de tipicidad, debido a la falta de definición y de claridad de la norma en la cual se fundamenta este Despacho para la imputación de los cargos; ha dicho al respecto el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en expediente radicado No. 1454 del 16 de octubre de 2002, Consejera Ponente Susana Montes de Echeverri, lo siguiente:

Pero, aún en esta materia, la Corte ha señalado, sentencia C-921 de 2001 que

"(...) Los principios que rigen en materia penal no son aplicables con la misma rigidez y rigurosidad al proceso administrativo disciplinario, de ahí que la Corte haya señalado en reiterada jurisprudencia, que los principios que rigen el derecho penal son aplicables mutatis mutandi al derecho disciplinario, lo cual encuentra justificación en la naturaleza y fines de uno y otro. La no total aplicabilidad de las garantías del derecho penal al campo administrativo obedece a que mientras en el primero se protege el orden social en abstracto y su ejercicio persigue fines retributivos, preventivos y resocializadores, la potestad sancionadora de la administración se orienta más a la propia protección de su organización y funcionamiento, lo cual en ocasiones justifica la aplicación restringida de estas garantías - quedando a salvo su núcleo esencial -en función de la importancia del interés público amenazado o desconocido (sent. T-145-93).

"Diferenciación que en reciente pronunciamiento se explicó en estos términos:

"La razón de ser de esa diferencia se encuentra en la naturaleza misma de las normas penales y las disciplinarias. En las primeras la conducta reprimida usualmente es autónoma. En el derecho disciplinario, por el contrario, por regla general los tipos no son autónomos, sino que remiten a otras disposiciones en donde está consignada una orden o una prohibición. Esta diferencia ha sido comentada por la doctrina especializada en los siguientes términos: 'Las normas penales no prohíben ni ordenan nada, sino que se limitan a advertir que determinadas conductas llevan aparejada una pena. Los tipos sancionadores administrativos, por el contrario, no son autónomos sino que se remiten a otra norma en la que se formula una orden o una prohibición cuyo incumplimiento supone cabalmente la infracción. Estas normas sustantivas constituyen, por ende, un pretipo, que condiciona y predetermina el tipo de la infracción. Y por ello si se quisiera ser riguroso, la descripción literal de un tipo infractor habría de consistir en la reproducción de la orden o prohibición del pretipo con la advertencia añadida de la sanción que lleva aparejada su incumplimiento, es decir una reproducción de textos de doble tipografía (Sent. C-404 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)."

Esta tesis también ha sido expuesta en muchas otras sentencias, tales como la C-599/92, C-309/93, C-417/93, C-259/95, C-244/96, C-280/96, C-690/96, C-1161/00, C-404/01 y C-740/01.

Esta explícita distinción y advertencia en cuanto a la aplicabilidad de los principios oriundos del derecho penal al derecho disciplinario, **son válidos igualmente respecto de las otras modalidades del poder sancionatorio del Estado, pues las razones que la explican militan también respecto de ellas.** (Negrillas fuera de texto)

Es por ello por lo que los motivos de inconformidad planteados en el escrito de descargos carecen en absoluto de soporte no sólo probatorio sino legal, toda vez que como **Representante Legal** le es exigible, de acuerdo con la ley, una mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, por la trascendencia social que representa la comercialización, de alimentos, al estar de por medio tal como se expuso con antelación la salud de la población.

Respecto a las circunstancias atenuantes consagradas en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997 solo puede ser considerado el hecho de no haber sido sancionado anteriormente o no haber sido sujeto de aplicación de medida sanitaria, sin embargo ello pierde valor al considerar la circunstancia agravante consagrada en el artículo 102 del decreto 3075 de 1997 de infringir varias disposiciones sanitarias con la misma conducta.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber al implicado que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **Nelson Mestra Cárdenas** identificado con cédula de ciudadanía No. 78.716.724, en su calidad de **Representante Legal, o quien haga sus veces**, del municipio de Arboletes, entidad propietaria de la **Plaza de Mercado** ubicada en el Barrio 20 de Julio del municipio de Arboletes Antioquia, con **MULTA** equivalente a **TREINTA (30) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No.**

18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los 15 MAY 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


RAUL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 041385

15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan

generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 6 de noviembre de 2010, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia al establecimiento denominado **Vídeos El Delfín Dorado** ubicado en la Calle 50 del municipio de Necoclí, Antioquia, cuya **Propietaria** es la señora **Enilfa Varilla Álvarez** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.415.462.

Que mediante Auto No. 22739 del 31 de octubre de 2011, se inició la presente investigación y por Auto No. 22982 del 21 de noviembre de 2011 se formuló cargos a la señora **Enilfa Varilla Álvarez**, en su calidad de **Propietaria** del establecimiento denominado **Vídeos El Delfín Dorado**, por infringir los artículos 417 y primer inciso del artículo 418 de la Ley 9 de 1979 y literal a numeral 6 artículo 2 del Decreto 3192 de 1983.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente a la involucrada, para que ejerciera su derecho de defensa, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual presentó los respectivos descargos dentro del término de ley.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 6 de noviembre de 2010, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos,

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con el parágrafo del artículo 576 de la Ley 9 de 1979, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

La conducta objeto de aplicación de medida sanitaria el día 6 de noviembre de 2010 es una infracción a los artículos 417 y primer inciso del artículo 418 de la Ley 9 de 1979, literal a numeral 6 artículo 2 del Decreto 3192 de 1983, por lo que al comprobar su violación se procedió al decomiso de los productos que constituyen evidencia física de la conducta infractora, que por demás se encuentra tipificada en el artículo 109 del Decreto 3192 de 1983, cuando establece que el Ministerio de Salud y los Servicios Seccionales de Salud, están en la obligación de ejercer control y vigilancia sanitaria, sobre las fabricas de alcohol y bebidas alcohólicas y sobre las bebidas alcohólicas para garantizar las condiciones sanitarias, de los procesos de elaboración, hidratación, envase, distribución, importación y exportación se procederá al decomiso del producto que no cumpla con las normas sanitarias vigentes.

La responsabilidad desplegada el día de los hechos, se encuentra enmarcada dentro de las normas de autenticidad y de las bebidas alcohólicas, específicamente sobre requisitos físico químicos, grado alcoholimétrico, color, características organolépticas y empaque por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal, así lo manifiestan los artículos 576 de la Ley 9 de 1979, en los artículos 109 y siguientes del Decreto 3192 de 1983.

La Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3192 de 1983 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

Frente lo anterior alega la implicada que sólo existe en el acervo probatorio el acta de decomiso y el análisis que realizó la Fabrica de Licores de Antioquia, además que no todas las conductas son punibles, ni merecedoras de sanción alguna, pues hay que tener en cuenta las circunstancias tempore especiales en que se llevó a cabo la conducta.

En cuanto al licor decomisado manifiesta que éste se encontró exhibido al público, lo que demuestra que no hubo mala fe de su parte, además que es responsabilidad de los empleados de la licorera por comercializar esta clase de productos.

Por ultimo alega que el artículo 9 de la Ley 599 de 2000, dice que para que la conducta sea punible debe ser típica, antijurídica y culpable, la falta de uno de dichos elementos hace que el delito desaparezca, ya que la culpabilidad viene de la voluntad del agente de cometer el hecho delictivo.

En cuanto al tema de la responsabilidad administrativa, ésta surge de la comisión de un hecho considerado por la Ley como infracción, lo que supone la concurrencia de la culpabilidad y de la antijuricidad en su autor, se dice entonces que es responsable el que esta comprometido a asumir determinada conducta o quien debe sufrir las consecuencias del incumplimiento de una obligación determinada.

En cuanto a la falta de tipicidad en los cargos imputados, es importante señalar, lo que la jurisprudencia ha dicho con relación a las facultades sancionatorias reconocidas a las autoridades administrativas, que como se verá, se convierten en una medida que puede adoptar la administración para constreñir o apremiar a los particulares a darle cumplimiento a la normatividad sanitaria, y cuya aplicación demanda la observancia de los principios y garantías que rigen el debido proceso.

Es entonces como, la Corte Constitucional en Sentencia C-160 de 29 de abril de 1998, manifestó:

“El poder sancionador que se ha reconocido a la administración, tiene como fundamento el jus puniendi que ostenta el Estado. Potestad ésta, que no sólo es ejercida por los jueces, sino por diversos funcionarios de la administración, que, para lograr el cumplimiento de las funciones que les han sido asignadas, deban hacer uso de éste, para garantizar el adecuado funcionamiento del aparato estatal.

“La no total aplicabilidad de las garantías del derecho penal al campo administrativo obedece a que mientras en el primero se protege el orden social en abstracto y su ejercicio persigue fines retributivos, preventivos y resocializadores, la potestad sancionatoria de la administración se orienta más a la propia protección de su organización y funcionamiento, lo cual en ocasiones justifica la aplicación restringida de estas garantías - quedando a salvo su núcleo esencial - en función de la importancia del interés público amenazado o desconocido.” (Corte Constitucional, sentencia T-145 de 1993, Magistrado ponente, doctor Eduardo Cifuentes Muñoz).

[. . .] El poder coactivo de la administración, en el ámbito de estas infracciones, tiene características muy particulares, que impiden su asimilación con el poder punitivo que, en el ámbito penal, ejerce el Estado. Lo anterior, empero, no significa que los derechos y garantías fundamentales del administrado sean desconocidos, pues, expresamente, se encuentran garantizados, en el artículo 29 de la Constitución. (...)”

Posteriormente, en el mismo sentido, se pronunció la Corte en Sentencia C-1161 de 6 de septiembre de 2000, cuando tuvo oportunidad de reafirmar:

“[. . .] Esta Corporación tiene bien establecido que si bien el derecho penal no es más que una de las especies del derecho sancionador, sin embargo los principios penales se aplican, mutatus mutandi, a los distintos ámbitos en donde opera el derecho sancionador. En efecto, en reiterada jurisprudencia esta Corporación ha establecido que los principios del derecho penal -como forma paradigmática de control de la potestad punitiva- se aplican, con ciertos matices, a todas las formas de actividad sancionadora del Estado. Y es que la Constitución es clara en señalar que el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (CP art. 29). Por consiguiente, el actor tiene razón en que la definición de un infracción debe respetar los principios de legalidad y proporcionalidad que gobiernan la actividad sancionadora del Estado.”

Conforme a las sentencias transcritas, es claro entonces, que para efectos del derecho administrativo sancionatorio, rigen los mismos principios aplicables en materia penal, no obstante, no se puede pasar por alto que su aplicación e interpretación, se deben hacer de manera restrictiva y sin desnaturalizar las características de cada una de las áreas en las que el Estado, ejerce esta clase de atribuciones.

Ahora, en cuanto a los principios del derecho punitivo que se ha reconocido deben aplicarse en materia administrativa, es preciso destacar el de legalidad, tipicidad, proporcionalidad y razonabilidad. Respecto a los dos primeros, la jurisprudencia antes citada, precisó en la misma Sentencia C-1161 de 6 de septiembre de 2000:

“[. . .] El principio de legalidad, propio del estado de derecho y, por ende, aplicable a todo el ordenamiento normativo, donde se haga uso del poder punitivo, impone que, para la aplicación de una sanción, exista un precepto en donde se describa claramente la conducta reprochable (tipicidad).”

“[. . .] Uno de los principios esenciales en el derecho sancionador es el de la legalidad, según el cual las conductas sancionables no sólo deben estar descritas en norma previa (tipicidad) sino que, además, deben tener un fundamento legal, por lo cual su definición no puede ser delegada en la autoridad administrativa. Además, es claro que el principio de legalidad implica también que la sanción debe estar predeterminada ya que debe haber certidumbre normativa previa sobre la sanción a ser impuesta pues, como esta Corporación ya lo había señalado, las normas que consagran las faltas deben estatuir “también con carácter previo, los correctivos y sanciones aplicables a quienes incurran en aquéllas”

Y, en relación con los dos últimos principios mencionados, ha señalado la Corte Constitucional en la sentencia C-160 de 1998, ya anotada:

[. . .] Es claro, entonces, que las sanciones que puede imponer la administración, deben estar enmarcadas en criterios de proporcionalidad y razonabilidad que legitimen su poder sancionador. Por tanto, en el caso en estudio, es necesario concluir que no todo error cometido en la información que se remite a la administración, puede generar las sanciones consagradas en la norma acusada."

Ahondando más en el análisis de la falta de tipicidad de las norma imputadas a la señora **Enilfa Varilla Álvarez**, quien manifestó que se le ha violado el debido proceso, por la ausencia de tipicidad, debido a la falta de definición y de claridad de la norma en la cual se fundamenta este Despacho para la imputación de los cargos; ha dicho al respecto el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en expediente radicado No. 1454 del 16 de octubre de 2002, Consejera Ponente Susana Montes de Echeverri, lo siguiente:

Pero, aún en esta materia, la Corte ha señalado, sentencia C-921 de 2001 que

"(...) Los principios que rigen en materia penal no son aplicables con la misma rigidez y rigurosidad al proceso administrativo disciplinario, de ahí que la Corte haya señalado en reiterada jurisprudencia, que los principios que rigen el derecho penal son aplicables mutatis mutandi al derecho disciplinario, lo cual encuentra justificación en la naturaleza y fines de uno y otro. La no total aplicabilidad de las garantías del derecho penal al campo administrativo obedece a que mientras en el primero se protege el orden social en abstracto y su ejercicio persigue fines retributivos, preventivos y resocializadores, la potestad sancionadora de la administración se orienta más a la propia protección de su organización y funcionamiento, lo cual en ocasiones justifica la aplicación restringida de estas garantías - quedando a salvo su núcleo esencial -en función de la importancia del interés público amenazado o desconocido (sent. T-145-93).

"Diferenciación que en reciente pronunciamiento se explicó en estos términos:

"La razón de ser de esa diferencia se encuentra en la naturaleza misma de las normas penales y las disciplinarias. En las primeras la conducta reprimida usualmente es autónoma. En el derecho disciplinario, por el contrario, por regla general los tipos no son autónomos, sino que remiten a otras disposiciones en donde está consignada una orden o una prohibición. Esta diferencia ha sido comentada por la doctrina especializada en los siguientes términos: 'Las normas penales no prohíben ni ordenan nada, sino que se limitan a advertir que determinadas conductas llevan aparejada una pena. Los tipos sancionadores administrativos, por el contrario, no son autónomos sino que se remiten a otra norma en la que se formula una orden o una prohibición cuyo incumplimiento supone cabalmente la infracción. Estas normas sustantivas constituyen, por ende, un pretipo, que condiciona y predetermina el tipo de la infracción. Y por ello si se quisiera ser riguroso, la descripción literal de un tipo infractor habría de consistir en la reproducción de la orden o prohibición del pretipo con la advertencia añadida de la sanción que lleva aparejada su incumplimiento, es decir una reproducción de textos de doble tipografía (Sent. C-404 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)."

Esta tesis también ha sido expuesta en muchas otras sentencias, tales como la C-599/92, C-309/93, C-417/93, C-259/95, C-244/96, C-280/96, C-690/96, C-1161/00, C-404/01 y C-740/01.

Esta explícita distinción y advertencia en cuanto a la aplicabilidad de los principios oriundos del derecho penal al derecho disciplinario, **son válidos igualmente respecto de las otras modalidades del poder sancionatorio del Estado, pues las razones que la explican militan también respecto de ellas.** (Negrillas fuera de texto)

La actividad que realiza la señora **Enilfa Varilla Álvarez**, en el establecimiento denominado **Vídeos El Delfín Dorado**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de licores por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Por lo que es su responsabilidad, no sólo adquirir los productos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización, a través de una adecuada recepción y revisando que cada producto tenga la información correspondiente a cantidad de unidades, número de lote, registro sanitario, fecha de vencimiento y su procedencia.

Es por ello por lo que los motivos de inconformidad planteados en el escrito de descargos carecen en absoluto de soporte no sólo probatorio sino legal, toda vez que como **Propietaria** le es exigible, de acuerdo con la ley, una mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, por la trascendencia social que representa la comercialización, al por mayor o al menudeo, de licores, al estar de por medio tal como se expuso con antelación la salud de la población.

Tener Productos Fraudulentos, **sin importar la cantidad que sea**, ponen en riesgo y en grave peligro la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, a través de la Dirección Factores de Riesgo, tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la **"producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados..."** Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en **la prevalencia del interés general.**"

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos

los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

Cuando se trata de investigaciones administrativas, corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de **culpa grave** de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión, en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factores atenuantes para la señora **Enilfa Varilla Álvarez**, los buenos antecedentes y la ignorancia invencible según lo contemplado en el artículo 182 del Decreto 3192 de 1983.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 124 del Decreto 3192 de 1983, son las siguientes:

- a) Amonestación.*
- b) Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) Decomiso.*
- d) Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber a la implicada que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

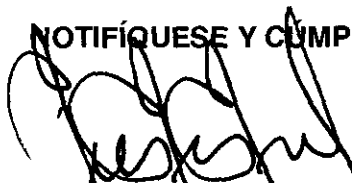
ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a la señora **Enilfa Varilla Álvarez** identificada con cédula de ciudadanía No. 39415462, en su calidad de **Propietaria** del establecimiento denominado **Videos El Delfín Dorado** ubicado en la Calle 50 del municipio de Necoclí Antioquia, con **MULTA** equivalente a **DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los 15 MAY 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

SUMARIO RESOLUCIONES MAYO 2012

NUMERO	FECHA	PAGINA	NUMERO	FECHA	PAGINA
041374	Mayo 15 de 2012	2	041381	Mayo 15 de 2012	31
041375	Mayo 15 de 2012	9	041382	Mayo 15 de 2012	36
041377	Mayo 15 de 2012	15	041383	Mayo 15 de 2012	41
041378	Mayo 15 de 2012	20	041384	Mayo 15 de 2012	46
041379	Mayo 15 de 2012	24	041385	Mayo 15 de 2012	53
041380	Mayo 15 de 2012	26			

RESOLUCIONES
Mayo de 2012

